

Cuando lo imposible en términos jurídicos se hace posible en términos políticos

**Informe sobre la violación a los derechos
humanos de los sindicalistas colombianos
en el año 2003**

**Cuaderno de
Derechos Humanos
no. 14**



UNIÓN EUROPEA

EDICIONES
ens ESCUELA
NACIONAL SINDICAL

Cuando lo imposible en términos jurídicos se hace posible en términos políticos

**Informe sobre la violación a los derechos
humanos de los sindicalistas colombianos
en el año 2003**

Escuela Nacional Sindical
Área de Derechos
Humanos y Laborales

Equipo:
Liliana López Lópera
Guilermo Correa

Medellín-Colombia
Abril 2004

EDICIONES
 ENS ESCUELA
NACIONAL SINDICAL



ESCUELA NACIONAL SINDICAL

Calle 51 N° 51-78

Tel: 513 31 00 - Fax: 512 23 30

Email: coddhlab@ens.org.co

www.ens.org.co

Asociaciada a la Federación Internacional de Asociaciones
para la Educación de los Trabajadores –FIAET–

ISBN: 958-8207-33-9

Fotografía: Patricia Velásquez y Edwin Vélez

Impresión: Pregón Ltda.

Impreso en papel biodegradable fabricado con fibra de caña de azúcar.

Este documento se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan exclusivamente la opinión de la ENS y, por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.



UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA ANDINO
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
2002-2005



ESCUELA NACIONAL SINDICAL

Contenido

Colombia ante los mecanismos de control de la OIT en el 2003 Norberto Ríos Navarro	5
Informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos en el año 2003	11
1. Una lectura preliminar	11
2. Cifras globales	14
3. Una lectura comparativa	16
4. Causas de la violencia contra los sindicalistas colombianos en el 2003	21
5. La violencia contra las mujeres, como estrategia de inmovilización	24
6. Violaciones según departamentos	28
7. Violaciones contra federaciones y centrales	31
8. Presuntos responsables	34
9. Propuestas y conclusiones	35
Anexos	
Hechos del 2003	39
Facsímil del texto de amenaza del Bloque “Cacique Calarcá” de las AUC	49

Colombia ante los mecanismos de control de la OIT en el 2003

Colombia ha sido objeto de estudio y debate en los distintos espacios de control de cumplimiento de obligaciones en la OIT, con mayor énfasis desde 1998: en la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones (comúnmente denominada Comisión de Normas), el Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración. En el año 2003, con ocasión de la 91 conferencia de esta organización, fue de nuevo objeto de examen por inculpaciones de violación de la libertad sindical.

Colombia en la Comisión de Normas

La Comisión de Normas es el organismo a través del cual la conferencia de la OIT ejerce control sobre los Estados respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas constitucionalmente o por ratificación de convenios. Colombia de nuevo en el 2003, y como lo ha sido en casi todos los años de la última década, fue incluida en la lista de países que deben comparecer ante esta Comisión, en su caso por incumplimiento del convenio 87 sobre libertad sindical y derecho de sindicación (sindicalización). Este deshonroso honor le correspondió jun-

to con otros 24 países, de los 176 que son miembros de la OIT.

A Colombia se la increpó por no adecuar la legislación a preceptos derivados del convenio 87, en especial en cuanto a: 1. prohibición de declaración de huelgas a federaciones y confederaciones; 2. declaratoria de ilegalidad de las huelgas por parte de autoridades administrativas y no por órganos independientes, en especial en los casos de huelgas de empleados del Estado, y 3. ausencia de definición del alcance del concepto de servicios públicos esenciales. También fue llamada a responder por la violencia contra los sindicalistas y porque, en la práctica, en materia de libertad sindical, limita la creación de sindicatos y la actuación de los dirigentes sindicales y restringe la negociación colectiva y la huelga.

El gobierno salió a defenderse indicando que las discrepancias hoy entre el convenio y la ley son sólo tres, contra las veinte en los años noventa; que su política de seguridad democrática está dando resultados, al punto que desde el inicio de este gobierno hasta hoy han disminuido considerablemente los asesinatos de sindicalistas, tanto que, según sus datos, durante el 2003 (mayo) sólo fueron asesinados 14 contra 84 en el 2002, es decir, una disminución del 84%; para el

gobierno este descenso tiene explicación “a partir de su convicción de lucha contra la violencia”, en los efectos del programa de cooperación de la OIT y en el amplio presupuesto que el gobierno ha asignado para la protección de los sindicalistas.

El gobierno llamó a los países y a la OIT a reforzar el programa de cooperación, y a los sindicalistas a cambiar su práctica de discusión por una de colaboración; invitó a los trabajadores a no filtrar la información antes de difundirla en el ámbito internacional; acusó a las ONG de haber creado un modus vivendi a partir de las duras realidades de Colombia y las invitó a cambiar su papel y a dedicarse a fortalecer la idea de un sindicalismo de colaboración y de participación antes que de reivindicación y confrontación.

Los trabajadores presentaron un patético cuadro de la situación de violencia contra los sindicalistas y de las limitaciones al ejercicio de la libertad sindical; responsabilizaron al gobierno de esta situación y de la impunidad en que permanecen estos casos de violencia, y solicitaron a la comisión que resalte en Párrafo Especial las conclusiones del caso y que se invite al Consejo de Administración para que resuelva la solicitud de una Comisión de Encuesta para Colombia.

La gravedad del tema condujo a

una numerosa e inusual intervención de los gobiernos: los europeos, en su mayoría, bastante críticos con el gobierno colombiano por la situación continuada de violencia e impunidad en que quedan los actos criminales contra los sindicalistas y por su renuencia a terminar de adecuar su legislación al espíritu y la letra de los convenios; los EE.UU. expresó su preocupación por la violencia pero, al mismo tiempo, su convencimiento de que el gobierno colombiano va por buen camino, mientras los países latinoamericanos que intervinieron respaldaron al gobierno colombiano.

El vocero de los empleadores reconoció las inadecuaciones entre el convenio y la ley pero, al igual que el gobierno, señaló que éstas ya son pocas con relación a la situación pasada; invitó al gobierno a realizar esfuerzos que disminuyan la impunidad, y a los miembros de la comisión a no respaldar medidas que debiliten las acciones y los esfuerzos de éste en la resolución de la violencia, como podrían ser el Párrafo Especial o la Comisión de Encuesta.

Se redactó una conclusión que reconoce la inadecuación de la legislación interna con relación al convenio, la práctica de limitaciones al ejercicio de la actividad sindical; la violencia contra los sindicalistas y la falta

de condena contra sus autores. Allí se insta al gobierno a tomar con urgencia las medidas necesarias para que cese la situación de inseguridad, para que los sindicalistas puedan ejercer libremente los derechos que les reconoce el convenio 87, y para que se tomen de inmediato medidas a efectos de garantizar la plena ejecución del convenio, tanto en la legislación como en la práctica, y, finalmente, se pide al gobierno que presente una memoria detallada, con inclusión de las respuestas a los comentarios de las organizaciones sindicales, para que la comisión pueda nuevamente examinar la situación en su próxima reunión.

Esta conclusión no recogió la solicitud de los trabajadores de Párrafo Especial, como consecuencia de la indolencia de los empresarios con la situación de los sindicalistas colombianos, sino que primó la solidaridad gubernamental y empresarial. Este comportamiento empresarial puso en evidencia una actitud de parcialidad y la aplicación de parámetros distintos según países, pues, fueron duros y exigentes con situaciones como las de Cuba y Venezuela, y complacientes con el comportamiento del gobierno y los empresarios colombianos.

En resumen, la sesión devino en una discusión y tensión políticas mayores de lo esperado por todos. El

gobierno entró muy confiado, esperó encontrarse con un ambiente calmado, de pocas críticas y de mucho apoyo gubernamental, pero resultó todo lo contrario. La situación de Colombia, motivada por todas las informaciones y documentos que se distribuyeron, produjo tal sentimiento de repudio y solidaridad por parte de los trabajadores, y de preocupación entre los gobiernos, que éstos sintieron la obligación de intervenir y llamar la atención del gobierno de Colombia sobre la necesidad de realizar mayores esfuerzos tendientes a mejorar la situación del sindicalismo colombiano. La solidaridad de cuerpo que el gobierno esperaba no se dio, por el contrario, debió soportar muy fuertes cuestionamientos de los trabajadores, y cuando menos el silencio de los gobiernos de los cuales esperaba pronunciamientos a su favor. La sensación de derrota del gobierno y los empresarios fue clara, como su indignación por la capacidad de *lobby* de los sindicatos y las ONG colombianos. La prepotencia gubernamental salió bien golpeada, ya tiene claro que el sindicalismo no está sólo, y que la solidaridad y la preocupación no son únicamente del sindicalismo internacional, también los son de algunos gobiernos, como los de los países nórdicos y los Países Bajos. La misma OIT expresó de nue-

vo su preocupación por las reacciones que genera su lentitud y exagerada discreción con el caso colombiano, sus procedimientos propician tanto críticas como reflexiones sobre la utilidad de los procedimientos y órganos de control.

Colombia en el Consejo de Administración

En junio de 1998 un grupo significativo de trabajadores presentó ante la Conferencia de la Organización de ese año una queja contra el gobierno colombiano por la violencia ejercida contra el sindicalismo, expresada en centenas de sindicalistas asesinados, amenazados y desplazados forzosamente de sus lugares de residencia y trabajo, y solicitaron el nombramiento de una Comisión de Encuesta para que estudiara las acusaciones hechas contra el gobierno colombiano. El Consejo de Administración abordó el estudio de esta queja en varias ocasiones y obvió el nombramiento de la Comisión de Encuesta, primero con el envío de una misión de contactos (febrero de 2000), después con el nombramiento durante un año de un delegado especial del director general (junio de 2000), y luego con el establecimiento de un programa especial de cooperación técnica (junio de 2001). Todas estas medidas han resul-

tado infructuosas respecto a la situación de violencia, y no han logrado que se detenga y mucho menos que desaparezca la violencia sistemática contra los sindicalistas, en especial contra sus dirigentes.

Apoyados en la inoperancia de las medidas sustitutivas de la Comisión de Encuesta, la delegación de los trabajadores colombianos presentes en la Conferencia de junio de este año, de manera unánime y unificada (elemento que hay que resaltar en comparación con actuaciones anteriores), decidió solicitar al Consejo de Administración la votación para el nombramiento de la Comisión de Encuesta. La solicitud se dio en medio de un ambiente favorable al gobierno colombiano, producto de la acción diplomática llevada a cabo por éste entre gobiernos y empleadores, los cuales expresaron la inconveniencia del nombramiento de la Comisión de Encuesta, ya que la consideran como un acto hostil contra el gobierno y un instrumento que obstaculiza los esfuerzos del gobierno de Álvaro Uribe por mejorar la situación de violencia en el país y contra los sindicalistas. Por el contrario, albergan gran esperanza en que el programa de cooperación técnica en desarrollo contribuya a mejorar tal la situación. Es más, la delegación sindical debió afrontar las dudas

de los propios delegados de los trabajadores en el Consejo de Administración sobre la pertinencia de forzar la votación en circunstancias de falta de preparación y de solidaridad manifiesta con el gobierno colombiano.

Conocedores de este ambiente desfavorable, se mantuvieron firmes en que el asunto puesto en consideración ante el Consejo de Administración fuera resuelto de una vez y no se dilatara con medidas que, a su entender, no se encaminaban a exigir el cumplimiento por parte del gobierno y de los empresarios de sus obligaciones de protección y respeto a la actividad sindical y a sus dirigentes. La votación se resolvió con 36 votos en contra, 15 a favor de la Comisión de Encuesta (los 14 delegados trabajadores y el delegado del gobierno de Sudáfrica) y dos abstenciones (Noruega y Canadá).

La decisión significó para los empresarios un gran respiro en el ambiente de intranquilidad que les generaba el eventual nombramiento de una Comisión de Encuesta. Hay que tener en cuenta que su aceptación implicaría el reconocimiento de una grave situación de violación de los compromisos adquiridos en la Constitución y en los convenios con la OIT, además, la propia investigación y en especial el incumplimiento de las recomendaciones

de la Comisión pueden traer consecuencias en la dinámica de los negocios. El gobierno también resultó ganador al aceptársele su invocación a un periodo de espera para demostrar su voluntad de colaboración y la eficacia de sus políticas, y al conseguir el apoyo de un número significativo de gobiernos.

La negativa para nombrar la Comisión de Encuesta no significa que este mecanismo se haya cerrado para los trabajadores, en cualquier momento pueden hacer uso de él, y de seguro así será, los casos de violación al ejercicio de la libertad sindical y las políticas activas de este gobierno contra los sindicatos y su derecho de negociación colectiva se agravan, además es total su complacencia con la política antisindical de los empresarios. Una eventual nueva solicitud de Comisión de Encuesta debe contar con una estrategia de publicidad y cabildeo para procurar el apoyo de los delegados gubernamentales, y hacerla en acuerdo con las centrales sindicales mundiales que hacen presencia en la Conferencia de la OIT.

Finalmente, hay que indicar que la desaprobación de la Comisión de Encuesta no significa que gobierno y empresarios se hayan liberado de responder por sus obligaciones de respecto a los compromisos derivados de los

convenios firmados por Colombia ante la OIT, ni mucho menos que hayan cesado los procedimientos de control. La Comisión de Normas y el Comité de Libertad Sindical continúan constatando el cumplimiento de sus observaciones y estudiando las quejas que presentan los trabajadores.

Colombia en el Comité de Libertad Sindical

Además de las intervenciones motivadas por la Comisión de Expertos en la Comisión de Normas y por los delegados de los trabajadores ante la Conferencia y ante el Consejo de Administración, el gobierno colombiano y los empresarios fueron cuestionados por decenas de sindicatos, quienes de manera directa o a través de organizaciones nacionales e incluso internacionales, presentaron quejas ante el Comité de Libertad Sindical por múltiples y graves violaciones a la libertad sindical. Este Comité ha sido inundado con las más diversas quejas en los últimos años, al punto que un porcentaje muy alto de los casos que debe estudiar provienen de Colombia, lo cual expresa lo generalizada y grave que es la violación de los derechos sindicales en el país.

Luis Norberto Ríos Navarro
Director general ENS

Informe sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos en el año 2003¹

1. Una lectura preliminar

En los últimos 12 años, en Colombia han sido asesinados 2.028 sindicalistas. Posiblemente resulta hiperbólico nombrar esta permanente situación de la violación a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados con la categoría de genocidio político. De antemano sabemos que la

situación del sindicalismo colombiano no evoca ni iguala jurídicamente a este concepto. Sin embargo, si se pasa por alto la rigurosidad pura del sistema jurídico internacional, se podría decir que con la tesis de genocidio político simplemente pretendemos nombrar la magnitud de una violación sistemática, selectiva, extendida en el

1. Durante el año 2003 la Escuela Nacional Sindical –ENS–, entregó a la opinión pública tres informes parciales sobre la situación de los derechos humanos de los sindicalistas colombianos. En el mes de mayo con información estadística del período enero 1° a mayo 15, el segundo con información de enero 1° a julio del 2003 y, el tercero, con información de enero 1° a noviembre 30. Cualquier referencia a ellos, deberá basarse en los datos consolidados del presente documento, en el que han sido depurados completamente. Para el caso de los homicidios hemos realizado una triangulación de fuentes con la Central Unitaria de Trabajadores –CUT– y con la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres –CIOSL–.

tiempo e impune de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados y sus organizaciones en Colombia.

Jurídicamente resulta forzado incluir esos 2.028 sindicalistas asesinados en las categorías que sobre el genocidio subyacen a las clasificaciones tradicionales del sistema internacional. Pero al mismo tiempo, resulta ética y políticamente válido recurrir a este concepto para denominar las prácticas y procesos históricos de exterminio. Por ello, y desde una postura esencialmente ética y política –y para nada jurídica–, nos atrevemos a señalar, incurriendo posiblemente en una inflación conceptual, que la violencia histórica contra el sindicalismo evidencia una situación en la cual lo imposible en términos jurídicos, se ha hecho posible en términos políticos; y lo impensable en términos políticos, se ha hecho real.

Este tránsito de lo imposible jurídicamente a lo posible políticamente nos permite nombrar como rasgos de la violencia contra el sindicalismo los siguientes:

- La crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contra-

rio, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y ese país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas.

- La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales (paros, huelgas, negociaciones colectivas y creación de sindicatos), aunque ellas ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra.
- La mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores colombianos se han realizado en momentos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales y, en este sentido, ellos no son víctimas casuales o colaterales del conflicto armado. En Colombia, la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación

del conflicto laboral colombiano.

- La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano evidencia, entre otras cosas, la incapacidad histórica del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad sindical y en muchos casos la entrega de sus funciones de mediación a agentes privados o a organizaciones armadas fuera de la ley y, fundamentalmente, la irrupción de una vasta red de instituciones e intercambios entre organizaciones legales e ilegales que cumplen con la función de regular los conflictos laborales a través del uso de la coerción, las armas y el terror.

Estas aclaraciones y la magnitud de la violencia contra el sindicalismo puede ser ilustrada señalando algunos aspectos esenciales de lo que podría denominarse la trama lógica y cronológica de la violencia contra el sindicalismo. Para la ENS dicha violencia presenta como puntos de inflexión centrales los siguientes hitos:

- El quinquenio 1991-1995 estuvo determinando por la guerra contra el agro y, específicamente, la guerra contra los trabajadores agrícolas agrupados en Sintrainagro en la zona bananera de Urabá.
- El año de 1996 estuvo marcado por el aumento de los asesinatos de los trabajadores en Colombia.

Este año presenta el mayor índice de homicidios contra sindicalistas, el mayor número de asesinatos de trabajadores en masacres y el mayor número de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en el país. Concretamente, en este año fueron asesinados 284 sindicalistas en todo el país; y 105 de ellos murieron en masacres cometidas por los actores armados en la zona bananera de Urabá. Y no sobra recordar que la grave crisis humanitaria experimentada por el sindicalismo en la región de Urabá durante este año, fue la consecuencia de los enfrentamientos entre las Farc, el EPL y las AUC.

- En el año de 1997 se aprecia un proceso de ampliación del proyecto paramilitar a lo largo de la geografía nacional y, por tanto, la aparición de nuevos territorios disputados por los actores armados. El correlato de estas nuevas disputas territoriales es la ampliación geográfica de los espacios en los cuales se violaban los derechos humanos de los trabajadores y la aparición del fenómeno del desplazamiento forzado de sindicalistas. Este último aparece como instrumento importante de la estrategia de guerra implementada por los actores armados para copar terri-

- torios y ejercer en ellos actos de soberanía.
- En el período que va de 1998 al 2000, la violación de los derechos humanos de los sindicalistas estuvo marcada por el auge de las intimidaciones, amenazas, violaciones a los derechos de asociación sindical y asesinatos de altos dirigentes sindicales. El paro nacional estatal, realizado entre el 7 y 26 de octubre de 1998, presentó como balance final 9 sindicalistas asesinados, permanentes choques con la fuerza pública, intimidación a las marchas de los trabajadores y aumento de la represión.
 - En el contexto general de los cambios e imbricaciones entre conflictos laborales y guerra, el año 2001 presenta un aumento de la violencia contra dirigentes sindicales, pues en ese año se reporta el mayor índice de homicidios de dirigentes con 63 casos. Paralelamente, en ese año se aprecia un aumento de la violencia de las organizaciones insurgentes contra trabajadores (especialmente a través de secuestros), la instrumentalización de los actores armados por parte de administraciones municipales para crear contextos de represión favorables a la aplicación de la Ley 617 –referida al ajuste fiscal de las entidades territoriales–, y el aumento de la violaciones a los derechos humanos de sindicalistas ubicados en los grandes centros urbanos del país (Bogotá, Cali, Barrancabermeja, Bucaramanga y Medellín), como consecuencia del proceso de urbanización del conflicto armado.
 - Finalmente, esta trama cronológica muestra que en el período 2002-2003, se presentan cambios en las lógicas globales de relación entre guerra y conflictos laborales. Estos cambios muestran una cara positiva en cuanto a la disminución de algunos indicadores y paralelamente, incrementos en las ya tradicionales formas de violencia contra los sindicalistas (amenazas, desplazamiento forzado, atentados, detenciones y hostigamientos).
- En el informe que presentamos a continuación se encuentra la información global en cifras sobre la violación a los derechos humanos de los sindicalistas en el año 2003 y una mirada comparativa y explicativa de las variaciones en el último periodo.
- ## 2. Cifras globales
- La información del banco de datos en derechos humanos de la ENS muestra que en Colombia, entre el primero de enero y el 31 de diciembre

del 2003, fueron asesinados 90 sindicalistas, 295 fueron víctimas de amenazas de muerte, 20 sufrieron atentados contra su integridad personal, 6 fueron desaparecidos y 6 más fueron secuestrados. A este preocupante panorama se suman los 42 sindicalistas detenidos,² los 12 allanamientos a residencias de dirigentes sindicales y los 55 casos de hostigamientos a dirigentes y a sus familias.

De estas cifras globales hay tres asuntos que merecen destacarse: En primer lugar, los aumentos vertiginosos de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas. En el año 2002 las mujeres fueron víctimas de 31 violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad. En el 2003 se reportan 194; es decir, entre uno y otro año la variación es de un 600%. Igualmente del total de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, el 31% fueron cometidas contra mujeres sindicalizadas. Esto corresponde a 104 amenazas de muerte, 27 homicidios, 42 desplazamientos, 8 detenciones, 8 hostigamientos, 2 secuestros y 2 allanamientos.

En segundo lugar, del total de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, 263 (el 43%) fueron cometidas contra dirigentes sindicales, miembros de juntas directivas, comités ejecutivos y subdirectivas de las centrales sindicales. Del total de sindicalistas asesinados, 36 eran dirigentes, cifra que mantiene la tendencia porcentual más o menos regular en la década. Del total de las 295 amenazas de muerte, 131 (44%) fueron dirigidas contra altos dirigentes sindicales, 20 dirigentes fueron detenidos y 11 se vieron sometidos a allanamientos en sus residencias.

Los trabajadores afiliados a la CUT siguen siendo las mayores víctimas de las violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad. Del total de sindicalistas asesinados, 84 estaban afiliados a esta central y 294 (99%) de los amenazados pertenecen a ella. Es necesario señalar además, que todos los miembros de las subdirectivas de la CUT en los departamentos de Valle, Arauca, Caldas y Risaralda, recibieron amenazas de muerte y como consecuencia de ellas muchos tuvieron que desplazarse y exiliarse.³

2. Estas cifras corresponden a los datos sistematizados por la ENS; sin embargo según la CUT, entre enero y diciembre del 2003, 72 sindicalistas fueron asesinados y más de 300 dirigentes sociales fueron detenidos. Véase: “Comunicado del departamento de derechos humanos del la CUT”, febrero del 2003.
3. Ver en el anexo el texto de la amenaza del “Bloque Cacique Calarcá”, realizada en octubre del 2003. Contra varios sindicatos en el departamento de Risaralda.

3. Una lectura comparativa

La mirada panorámica a las 617 violaciones al derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas durante el año 2003, muestra un cambio en las modalidades del uso de la violencia. Si se toman como horizonte de comparación los años 2001 y 2002, resulta claro que en el 2003 se presentó una mayor magnitud en las violaciones referidas a las amena-

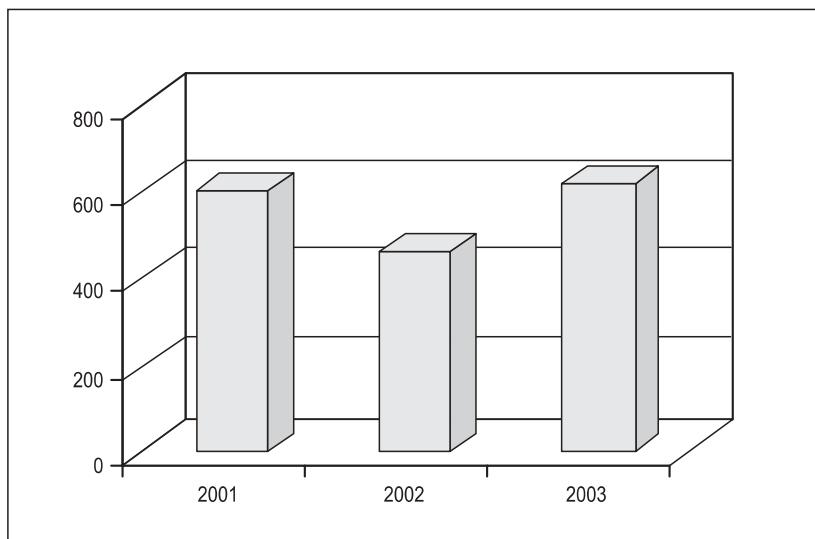
zas de muerte, el desplazamiento forzado y las privaciones a la libertad de trabajadores; en contraste, disminuyeron los homicidios, los secuestros y las desapariciones forzadas de sindicalistas; lo que nos lleva a concluir que hubo un cambio en las modalidades de la violencia. El siguiente cuadro comparativo nos muestra estas variaciones comparativas:

Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos entre enero 1º y diciembre 31 de los años 2001, 2002 y 2003

Tipo de violación	2001	2002	2003
Amenazas de Muerte	233	189	295
Homicidios	196	184	90
Atentado con o sin lesiones	24	17	20
Desaparición	12	9	6
Allanamiento	1	-	12
Detención	7	11	42
Hostigamiento	13	19	55
Secuestro	41	27	6
Desplazamiento	70	2	91
Tortura	1	1	-
Total	598	459*	617

* En mayo del 2002 fueron retenidos 128 trabajadores de Telecom en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, durante el desarrollo de un conflicto laboral y aproximadamente 80 sindicalistas más fueron víctimas de amenazas y debieron exiliarse como consecuencia de ellas. Estas cifras no se incluyen en este cuadro porque no hacen parte de las variables consideradas en nuestro sistema de información. Fuente: Banco de datos de derechos humanos de la ENS.

Estadística de violaciones por años



Fuente: ENS

De estas cifras se pueden destacar dos aspectos: En primer lugar, muestran que no existe un cambio en el panorama general de la violación a los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, pues las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en el 2003, se inscriben y responden a las tendencias registradas a lo largo del periodo comprendido entre 1991 y el 2002. Las variaciones existentes no alteran el carácter de una violencia selectiva, deliberada y

permanente y, fundamentalmente, no transforman la persistencia de la cultura antisindical que cataloga a los trabajadores sindicalizados como una amenaza para el orden interno en el país. Es por esto que insistimos que en Colombia existe una intención deliberada y calculada de los actores armados y no armados para debilitar, acabar o restringir la acción de las organizaciones sindicales.⁴

En segundo lugar, nos permiten develar algunos cambios generales en

4. Una mirada más amplia sobre las tendencias en la violencia contra el sindicalismo colombiano puede verse en: “Informe sobre derechos humanos de los sindicalistas colombianos 1996-2000”, *Cuaderno de Derechos Humanos N° 11*, Medellín, Escuela Nacional Sindical, marzo de 2001.

la modalidad de las violaciones. Concretamente se aprecia la disminución de los homicidios y los secuestros y un aumento del desplazamiento, de los atentados, de las amenazas de muerte y de la violación a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas. Estas variaciones se encuentran relacionadas con los cambios en las estrategias de guerra, la movilidad territorial de los actores, la resolución o disminución de las disputas territoriales armadas y con la implementación de procesos de negociación o acuerdos puntuales entre las organizaciones paramilitares y el gobierno.

Las variaciones positivas que se presentan en algunos indicadores no son el resultado de la aplicación de políticas gubernamentales deliberadamente orientadas a garantizar y a proteger los derechos de asociación sindical en el país, sino el resultado, bastante contingente, de las lógicas de acción y los cálculos políticos y estratégicos de los actores del conflicto armado. La tregua unilateral decretada por algunos sectores del paramilitarismo incidió favorablemente en la reducción de los asesinatos de trabajadores sindicalizados, pues ellos han sido los responsables de la mayoría de los homicidios de sindicalistas. Sin embargo, esta cara positiva de la moneda contrasta con el aumento de las ame-

nazas de muerte que han proferido estas mismas organizaciones armadas.

La disminución en un 51% de los homicidios ocurridos durante el 2003, debe ser leída en el contexto general de la disminución de los homicidios cometidos por organizaciones paramilitares. Paralelamente, las variaciones positivas en otros indicadores deben leerse a la luz de los cambios experimentados por las guerrillas en el contexto de la guerra desplegada por el Estado. La ofensiva de las fuerzas militares ha conducido a las Farc a una suerte de repliegue estratégico y esto ha incidido positivamente sobre algunos indicadores de los derechos humanos. Por ejemplo, la disminución del 77% de los secuestros sólo puede comprenderse en el marco de los cambios en las lógicas de la violencia guerrillera, recordemos que en los años 2001 y 2002, dichas organizaciones fueron responsables de los 20 secuestros (29%) en esos años.

En el mismo contexto, el deterioro de algunos indicadores sobre derechos humanos de los trabajadores sindicalizados es el resultado directo de la acción estratégica desplegada por el Estado. Una mirada global a los 617 casos de violaciones a la vida, la libertad y la integridad en el 2003, nos demuestra una vez más, que todos aquellos gobiernos que se han pro-

puesto como objetivo conseguir la paz –o ganar la guerra–, han acompañado su discurso de voluntad de paz –o voluntad de guerra–, con un progresivo endurecimiento en la actitud hacia los actores del conflicto económico y social que se ubican por fuera de la acción armada.

El sello de las políticas de paz –o de seguridad– nos presenta como constante histórica, un aumento escandaloso de la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de cualquier protesta sindical como ilegal, los hostigamientos de la fuerza pública a todo movimiento de protesta y el aumento de las amenazas a trabajadores sindicalizados en momentos clave de resolución de conflictos laborales. Esto se ilustra con las detenciones y declaratorias de restricción a las movilizaciones ciudadanas en 1998 y 1999 (año del proceso de negociación con las Farc) y el aumento de las detenciones, los allanamientos y hostigamientos por parte de la fuer-

za pública a las organizaciones sindicales en el contexto de la estrategia de guerra del gobierno de Álvaro Uribe. La actual política gubernamental con los sindicatos de Telecom, Ecopetrol y el Seguro Social evidencian la existencia, tal como lo recordó el periódico *El Tiempo* en su edición del 1º de mayo, de “un Estado que dialoga con más facilidad con los grupos armados que con las organizaciones legítimas del trabajo y que tiende a criminalizar la protesta social”.

Se puede afirmar entonces que las detenciones “legales”, las retenciones arbitrarias, los allanamientos y los hostigamientos⁵ por parte de organismos estatales, se constituyen en elementos violatorios de la libertad individual y contribuyen a la generalización de una cultura antisindical que continúa señalando a las organizaciones sindicales como organizaciones colaterales a la subversión y como un estorbo para el progreso económico de las empresas.

-
5. Según el banco de datos de la ENS, los siguientes sindicalistas, entre otros, fueron detenidos y vinculados a procesos por terrorismo y subversión: **Hernando Hernández**, secretario de asuntos internacionales de la Unión Sindical Obrera –USO–; **Robinson Beltrán Herrera**, presidente de Sinraelecol en Cartagena; **Teresa Mazo**, dirigente de Sintrahospiclínicas en Bucaramanga; **Rafael Palencia Fernández**, presidente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo en Cartagena; y, **Policarpo Camacho**, dirigente del Sindicato Agrícola del Municipio de Calarcá en el Quindío. A los siguientes trabajadores entre otros, les fueron allanadas sus residencias: **Samuel Reyes**, de la Federación Colombiana de Educadores –Fecode–; **Germán Robison**, directivo de Sindicato de Maestros de Nariño; y, **Rafael Palencia Fernández**, mencionado anteriormente como detenido.

No resulta ligero afirmar entonces, que desde el marco internacional de los derechos humanos, los 12 allanamientos contra sedes o domicilios de dirigentes sindicales, las 42 detenciones de sindicalistas y los 55 casos de hostigamiento ocurridos entre enero y diciembre del 2003, se constituyen en actos violatorios de la libertad individual y a los derechos de libertad sindical y, además, evidencian la paradoja a la que se enfrentan las organizaciones políticas y sociales cuando se vislumbran procesos de paz o se establecen estrategias definitivas de guerra contra alguno de los actores armados en el país.

Esta cultura antisindical, que es tan antigua como la historia misma del sindicalismo en Colombia, encuentra un espacio propicio para su desarrollo y se puede ver reforzada con la expedición y aprobación del “Estatuto antiterrorista” en diciembre del 2003. El conjunto de artículos incluidos en él, posiblemente pueden ser útiles para enfrentar el conflicto arma-

do; sin embargo, las reformas que supone introducen una serie de medidas orientadas a limitar las libertades individuales. Este conjunto de limitaciones que desconocen y pasan por alto los presupuestos del sistema internacional de los derechos humanos y las recomendaciones de Naciones Unidas para Colombia, han sido y siguen siendo un instrumento para limitar el ejercicio pleno de los derechos de libertad sindical y para impedir la acción pública, política y legal de las organizaciones sindicales.

Estos hechos, sumados al deterioro de los derechos laborales y sindicales de los colombianos⁶, y al cierre de los espacios de concertación, hace explícita la postura antisindicalista del gobierno Uribe y, fundamentalmente, la ceguera de un gobierno que no asume la paradoja de la seguridad en términos de la construcción de un escenario de resolución no armada de los conflictos sociales y políticos que aquejan al país.

6. Desde 1990, el 2003 ha sido uno de los peores años para los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras colombianos: entró en vigencia la reforma laboral que redujo los costos laborales; comenzó la aplicación de la reforma pensional que hace más difícil la posibilidades de acceder al derecho a tener una pensión; y se retrocedió gravemente en los derechos de libertad sindical. Sobre el deterioro de los derechos sindicales y laborales en los años 2002 y 2003 puede verse: “Trabajo, la reforma laboral, deslaboralización y despidos”, Escuela Nacional Sindical, En: *El Embrujo Autoritario. Primer Año de gobierno de Alvaro Uribe Vélez.*, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá, septiembre de 2003.

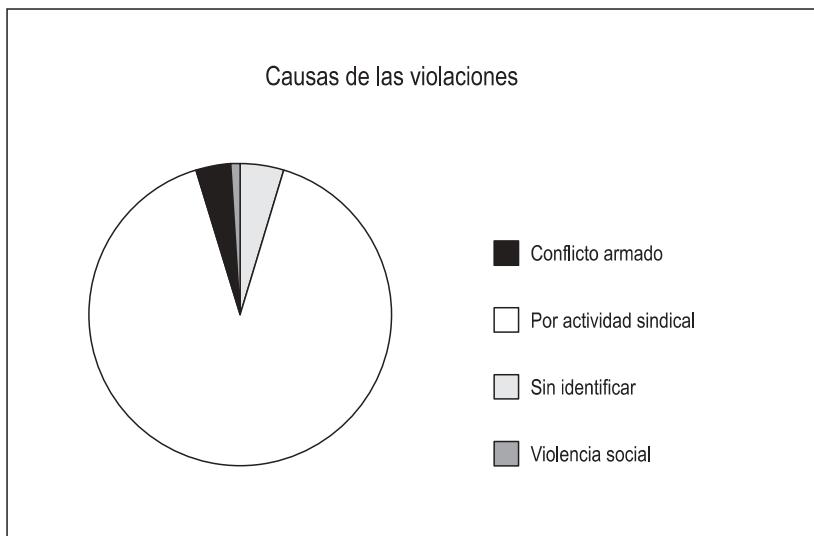
4. Causas de la violencia contra los sindicalistas colombianos en el 2003

Causas de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados entre enero 1º y diciembre 31 del 2003

Causas	2003	%
Conflictivo armado	29	4,70
Actividad sindical	559	90,60
Violencia social	6	0,97
Sin identificar	23	3,73
Total	617	100,00

Fuente: ENS

Causas de las violaciones



Fuente: ENS

El estado de guerra que vive Colombia y la articulación entre el conflicto armado y los conflictos labora-

les no pueden conducir a afirmar que existe una relación lineal y causal entre la guerra y la violación de los de-

rechos humanos de los trabajadores. Pero para la ENS resulta claro que casi todas las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en el 2003, están relacionadas con sus actividades sindicales. La omnipresencia de la guerra y el que las violaciones sean cometidas en la mayoría de los casos directamente por los actores de ésta, pone al descubierto el problema de los métodos pero no el de la intencionalidad. La guerra es un instrumento utilizado por diversos sectores del país –un método–, para debilitar, neutralizar y acabar con las organizaciones de trabajadores. Por eso no resulta extraño que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores colombianos se produzcan en momentos en los cuales se resuelven o se terminan los conflictos laborales; es decir, que ocurren durante la negociación de pliegos y convenciones colectivas y durante la realización de paros nacionales y locales.

Esta situación no es el resultado de una violencia indiscriminada, irracional, no calculada y casual; por el contrario, es selectiva, discriminada y calculada, pues se dirige contra los altos dirigentes sindicales y los dirigentes intermedios⁷ de organizaciones

que tienen grandes niveles de interlocución social, alta presión pública y una gran movilidad política. Es el caso, por ejemplo, de aquellas federaciones de rama, como Fecode, que juegan un papel predominante en la definición de políticas públicas; de aquellas centrales obreras, como la CUT, que poseen una gran capacidad de interlocución y movilización, y de aquellos sindicatos nacionales como Sinaltrainal, la Unión Sindical Obrera –USO– y Sintraelecol, entre muchos otros, que operan en sectores estratégicos de la economía nacional

Aceptar que en contextos de guerra como el nuestro existe una menor posibilidad de garantía de los derechos humanos y que, incluso, lo “normal y esperado” es que en dichos contextos los eventos, la lógica y la gramática de la guerra se traslade al escenario de los conflictos sociales y laborales, no debe llevarnos a pasar por alto que los grupos armados –en permanente negociación con grupos no armados– han acudido al desplazamiento, al secuestro, a las amenazas y al asesinato de trabajadores como una estrategia calculada para acabar con las organizaciones sindicales o para presionar negociaciones. Esta penetración de la

7. Por altos dirigentes entendemos a los miembros de Juntas Directivas, Comités Ejecutivos, activistas sindicales con gran trayectoria, delegados sindicales y miembros de comités obreros y comités paritarios de salud ocupacional.

guerra sobre el mundo laboral puede ser constatada con aquellos casos en los cuales alcaldes y empresarios han puesto a su servicio grupos armados para obligar a los afiliados a renunciar a los sindicatos, a las convenciones colectivas y al trabajo.

Para ilustrar nuevamente que la violencia contra los sindicalistas ocurre a menudo en medio de conflictos laborales, observemos los siguientes ejemplos:

- La “renuncia voluntaria” a los derechos adquiridos por convención colectiva de parte de los trabajadores del hospital del La Ceja, oriente antioqueño, afiliados en la **Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas –Anthoc–**, después de la presión a que fueron sometidos por las organizaciones paramilitares;⁸
 - Las amenazas a la junta directiva de **Sinaltrainal** en momentos en que se encontraba negociando el pliego de peticiones con la empresa Femsa Coca-cola en mayo del 2003 y, la renuncia obligada, por motivos de amenazas, del árbitro escogido para representar a esta organización sindical en el conflicto laboral con la transnacional Nestlé-Cicolac en Valledupar, en febrero del 2003;⁹
 - El asesinato de **Juan de Jesús Gómez**, presidente de la subdirectiva de **Sintrainagro**, en momentos en los que su organización sindical había terminado la etapa de arreglo directo con la empresa Palmas del Cesar y se preparaba para iniciar la huelga en esa empresa;
 - Las amenazas recurrentes a dirigentes, juntas directivas y familiares de los afiliados a la –**USO**– en Bucaramanga, Barrancabermeja y Bogotá; y;
 - Las amenazas el 21 de octubre del 2003 por la célula urbana del Bloque Cacique Calarcá de las Autodefensas Unidas de Colombia, contra **José Vicente Villada, Antonio J. Ramírez Arias, Bernardo Bernal Álvarez, Gloria Inés Ramírez Ríos, Diego María Osorio, Jhon Jairo Loaiza, Ubenny Morales, Javier Duque Murillo, William Gaviria Ocampo y Gustavo Ramírez**; directivos sindicales afiliados a la CUT, al Sindicato de Educadores del Risaralda, Unión de Motoristas
-
8. Véase el acta de renuncia firmada por los trabajadores y representantes de la empresa, en la que se expone como razón de ella la necesidad de disminuir gastos operativos. Acta firmada el 14 de febrero del 2003. en la Ceja Antioquia
9. Véase la denuncia emitida por Sinaltrainal en mayo del 2003.

y Sindicato de Vendedores Ambulantes.¹⁰

Estos casos son sólo una muestra arbitraria de una situación que cuestiona, con la contundencia de los hechos, aquella tesis que afirma que la omnipresencia de la guerra es la causa de todos los males del país. Con esta afirmación sólo se pretende afirmar que la solución a la crisis humanitaria del sindicalismo colombiano no puede estar mediatisada por la aceptación acrítica del argumento gubernamental y empresarial, según el cual, el gobierno de Colombia no es responsable directo de los actos de violación de los derechos humanos de los trabajadores, pues las dinámicas del conflicto armado le han hecho perder su capacidad de control y regulación de la vida social. Posiblemente, una tesis mucho más apegada a los

hechos señalaría que en un contexto de profunda debilidad del Estado y de anarquía social, la guerra ha sido, precisamente, un instrumento utilizado por sectores del Estado y sectores patronales para regular, sin resolver, conflictos que se ubican en el estricto plano del mundo laboral.

5. La violencia contra las mujeres, como estrategia de inmovilización

El aumento en un 600% de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres sindicalizadas en Colombia en el 2003, constituye, sin lugar a dudas, uno de los hechos más preocupantes y dramáticos de la situación general experimentada por los trabajadores y el movimiento sindical colombiano.

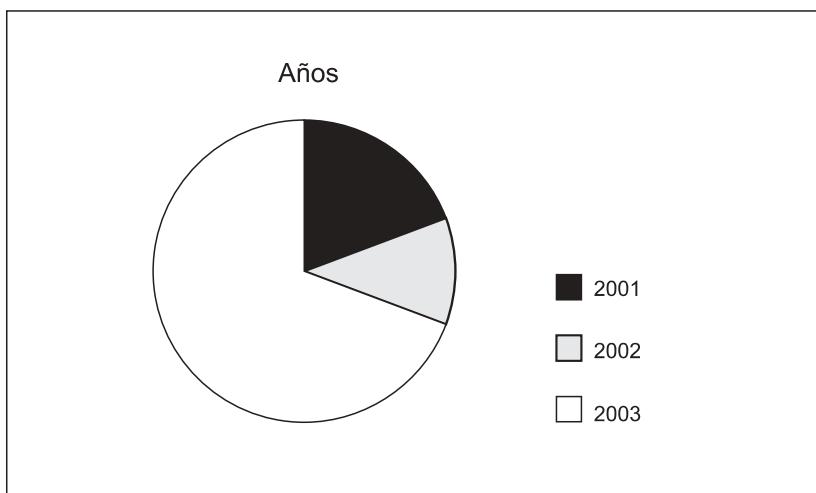
10. Véase en el anexo el comunicado completo de esta célula de las AUC.

**Total de violaciones contra mujeres sindicalizadas
en Colombia durante enero 1 y diciembre 31
de los años 2001, 2002 y 2003**

Tipo de violación	2001	2002	2003
Amenazas de Muerte	14	6	104
Homicidios	25	20	27
Atentado con o sin lesiones	5	-	1
Desaparición	-	1	-
Allanamiento	-	-	2
Detención	-	-	8
Hostigamiento	1	-	8
Secuestro	2	3	2
Desplazamiento	6	1	42
Total	53	31	194

Fuente: ENS.

Estadística de violaciones por años



Fuente: ENS.

Tradicionalmente la violencia antisindical contra las mujeres ha sido interpretada como un efecto colateral de la guerra, con excepción de las acciones realizadas contra mujeres de la alta dirigencia sindical. Las víctimas de esta violencia, han sido observadas como víctimas de un conflicto armado indiscriminado o como víctimas accidentales de la violencia ejercida y dirigida contra el movimiento sindical. En este sentido, las cifras de violaciones contra mujeres en la mayoría de los casos, han sido desestimadas y aparecen como incipientes frente a la totalidad de violaciones dirigidas contra los líderes o dirigentes sindicales masculinos. Sin embargo, más allá de las cifras registradas, es necesario revisar las violaciones contra mujeres en la simbología y en la fómenología de los hechos y en las intenciones y lenguajes de sus victimarios.

Lo que se aprecia, en último término, en el aumento de la violencia contra las mujeres es el desplazamiento de las violaciones hacia todo el núcleo familiar del trabajador o trabajadora sindical, que compromete además, la integridad de las personas que no pertenecen al movimiento sindical.

Con el incremento sustancial de las violaciones dirigidas contra las mujeres sindicalizadas es posible des-

estimar la tesis de víctimas colaterales, pues estos casos se introducen en la lógica de una violencia discriminada cuyos objetivos se sitúan más allá de la simple intención de silenciar a la víctima. Ellas reflejan en sus intenciones una finalidad simbólica y estratégica de inmovilidad y terror.

Una mujer asesinada en presencia de sus hijos, una mujer mutilada, una mujer a quien se le amenaza la vida de sus hijos o una mujer a quien se utiliza como medio de presión, se convierte en el vehículo simbólico a través del cual el mensaje es exemplificante y se dirige a otros. Por tanto estas violaciones no son un fin en sí mismo, no se revisten de la intención del castigo o de la venganza; por el contrario, son la imagen del terror dirigido a los otros: hijos, familiares, vecinos y demás sindicalistas; y buscan, contundentemente, presionar la elección entre la vida y la integridad o la actividad sindical.

La violencia dirigida contra las mujeres posee además, una fuerte connotación cultural. En la vinculación de su rol social como madres, esta asignación social la hace responsable no sólo de su vida sino de todo su núcleo familiar, de tal forma que la integridad y bienestar de sus hijos están depositadas en ella, lo que implica que cualquier acción contra ellas es un

efecto directo contra los otros. En esta lógica los victimarios han desarrollado singulares formas de presionar o diezmar a quienes consideran el adversario y, en el caso de la mujeres sindicalizadas, sus acciones aparecen investidas de una elevada dosis de terror.

El fusilamiento de la profesora **María Rebeca López** realizado por un grupo armado desconocido en el municipio de Uramita, departamento de Antioquia;¹¹ el asesinato de **Morelly Guillén**, trabajadora de la salud, afiliada a Anthoc en el municipio de Tame, departamento de Arauca;¹² la detención, tortura y decapitación de la maestra **Liliana Caicedo Pérez** por grupos desconocidos en el departamento de Nariño;¹³ el secuestro y posterior asesinato de la educadora **Ana**

Cecilia Duque Villegas,¹⁴ por el ELN; y el asesinato de **Lina Mamian**,¹⁵ el 10 de agosto en el municipio de Timbío, departamento de Cauca, luego de haber denunciado a un miembro de los paramilitares, muestran que en Colombia lo imposible se hace posible y, se convierte en una forma de regulación, dominación e inmovilización.

Es importante señalar que **María Rebeca** fue fusilada frente a su hijo de tres años, que **Morelly Guillén** fue asesinada en el interior de su casa que el cuerpo de **Liliana Caicedo** fue encontrado decapitado y con señales de tortura en el exterior de su casa y, que el secuestro y posterior asesinato de **Ana Cecilia Duque** fue el resultado de una retaliación contra su padre.

Los asesinatos mencionados ante-

11. María Rebeca López estaba afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia –Adida–. Fue asesinada el 29 de mayo del 2003. *Revista Noche y Niebla* N° 27, Cinep y Justicia y paz, Bogotá, enero-junio, 2003. p. 244.
12. Morelly Guillén fue asesinada el 16 de junio 2003. *Ibid*, p. 271.
13. Liliana Caicedo Pérez estaba afiliada al Sindicato de Educadores de Nariño –Simana–. Había solicitado al Ejército Nacional que no utilizaran las instalaciones del centro educativo como campamento para ellos, por el riesgo que suponía para sus alumnos. Posteriormente la profesora fue sacada de su vivienda por personas no identificadas y fue asesinada el 21 de junio del 2003. *Ibid*, p. 277.
14. Ana Cecilia Duque fue secuestrada y asesinada el 26 de abril del 2003. Véase “Comunicado a la opinión pública de la ENS”, 2 de mayo de 2003.
15. Lina Mamian fue asesinada el 10 de agosto del 2003 al frente de su casa, de diez impactos de bala. Según informaciones de la comunidad el responsable, un paramilitar de la zona, fue capturado y luego dejado en libertad después de que su comandante, alias “Rubén”, pagó un millón de pesos por su libertad. Al respecto véase el portal Web: www.nocheyniebla.org, casos y hechos de agosto del 2003.

riormente poseen un *modus operandi* similar. Todas estas mujeres pertenecían al sector de la educación y desarrollaban actividades significativas para la comunidad, lo que las hacía líderes importantes y reconocidas. En la mayoría de los casos las docentes fueron asesinadas ante testigos: hijos,

vecinos y familiares. Todas fueron objeto de degradaciones pública y se usaron como símbolos ejemplarizantes: Con estos asesinatos los victimarios se aseguraron de que el mensaje fuera contundente, crudo y directo para la población.

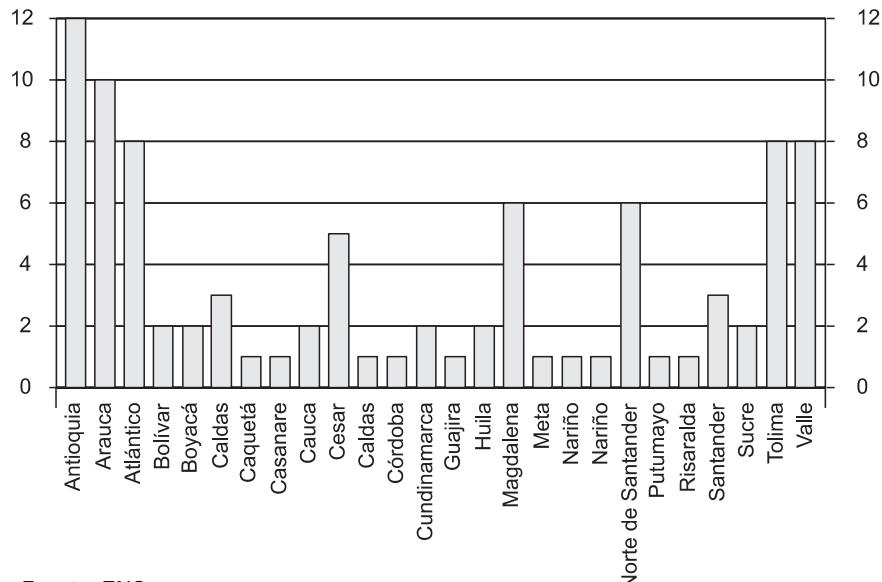
6. Violaciones según departamentos

Departamentos más peligrosos para la actividad sindical entre enero 1º y diciembre 31 del 2003

Departamentos	Nº homicidios	Nº amenazas
Antioquia	12	37
Atlántico	8	
Arauca	10	135
Valle	8	23
Cesar	5	1
Magdalena	6	-
Bolívar	2	4
Santander	3	29
Norte de Santander	6	1
Tolima	8	1
Risaralda	1	20
Cundinamarca	2	3
Bogotá D.F.	-	34
Caldas	3	-

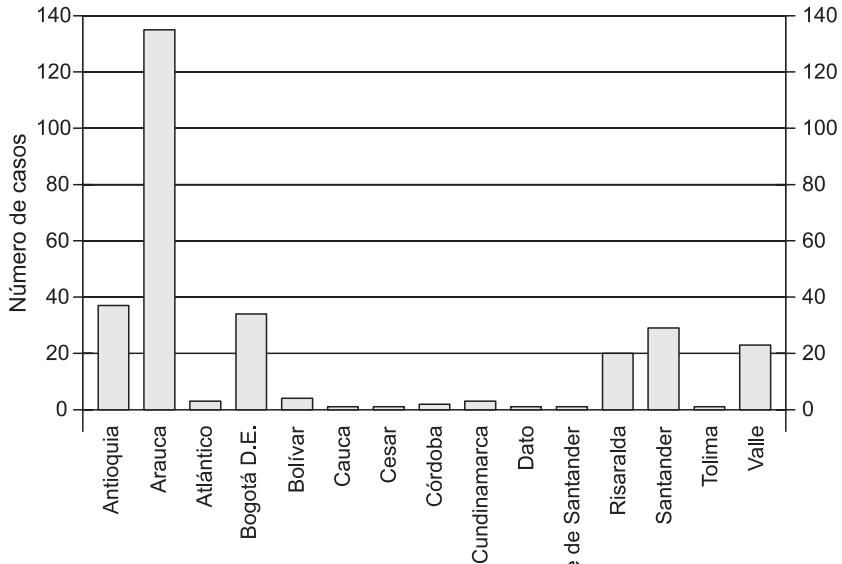
Fuente: ENS.

Homicidios contra sindicalistas colombianos, por departamentos



Fuente: ENS

Amenazas de muerte contra sindicalistas colombianos, por departamentos



Fuente: ENS.

**Total de violaciones a la vida, la libertad
y la integridad de sindicalistas colombianos,
en el departamento de Antioquia durante
enero 1º y diciembre 31 del 2003**

Tipo de violación	Nº de casos
Homicidios	12
Amenazas de muerte	37
Desplazamientos forzados	4
Atentados	1
Secuestros	2
Detenciones	1
Total	57

Fuente: ENS

Los dos cuadros anteriores son reveladores de tres situaciones: En primer lugar, señalan una disminución de la violencia contra los trabajadores en el departamento de Antioquia, que hasta el año 2001 era considerado el lugar más peligroso de Colombia para ejercer la actividad sindical. En segundo lugar, evidencian la aparición de nuevos territorios disputados por los actores armados y, como correlato, de estas nuevas disputas, la ampliación geográfica de los espacios en los cuales se violan los derechos humanos de los trabajadores. Finalmente, muestran la responsabilidad del Estado en estas violaciones, ya que, como en el caso de Arauca, durante este año fue declarada una de las zonas especiales

de orden público por el gobierno.

La consolidación del paramilitarismo en varios municipios antioqueños, el debilitamiento que sufrieron las organizaciones sindicales en el periodo 1997-2001 y el exterminio de muchos dirigentes y algunas organizaciones sindicales son algunas de las causales explicativas de la significativa disminución de la violencia en este departamento. Sin embargo, Antioquia sigue a la cabeza de los departamentos colombianos en donde más se asesinan sindicalistas. De otro lado, el aumento de los asesinatos y amenazas en el departamento del Valle se encuentra profundamente vinculado a las disputas territoriales que libran las Farc, los paramilitares y el ELN en esa

región. A la situación del Valle se le agregan, las disputas entre los carteles de la droga y los enfretamientos internos de los grupos paramilitares.

La situación de los sindicalistas en general y la agudización y agravamiento de la violencia contra Sintramcali en el 2003, podría mirarse desde el marco de la intensificación de la guerra y de la presencia de múltiples actores del conflicto armado en dicho departamento; sin embargo, las amenazas recurrentes contra estos trabajadores y los asesinatos en marzo del 2003 de **Jorge Vásquez, Wílmer**

Vergara y Nelson López son la consecuencia de la fuerte acción que contra la privatización de las Empresas Públicas de Cali han realizado los trabajadores desde el año 2000.

7. Violaciones contra federaciones y centrales

En el 2003, los sectores sindicales más afectados fueron: El magisterio, en especial los profesores de primaria y secundaria del ámbito municipal y agrupados en Fecode, los trabajadores de la salud agrupados en Anthoc y los miembros de las subdirectivas de la CUT de varias regiones del país.

El caso del magisterio colombiano, que sigue siendo el caso más grave en el país, se encuentra relacionado con tres aspectos: En primer lugar,

este sector realiza una gran presión política por su capacidad de protesta social y de interlocución política, y, por tanto, es estratégico para las protestas contra las políticas neoliberales y las de reducción del gasto social que se han aplicado en Colombia en la última década. En segundo lugar, este sector tiene la organización más importante y grande del país. Y, en tercer lugar, cuenta con la mayor diversidad en cuanto a ubicación geográfica de los trabajadores y de sedes escolares en zonas disputadas por los actores del conflicto armado.

El otro caso protuberante es el de la CUT que reporta, además, el 99% de las amenazas, el 59% de los detenidos, el 83% de los secuestros y el 100% de las desapariciones forzadas. Aceptando que puede existir un subregistro respecto de las otras dos centrales colombianas, tenemos que señalar que la violencia contra la CUT, evidencia una vez más el carácter selectivo, discriminado y calculado de la violencia sindical en Colombia.

De esta violencia general contra los trabajadores afiliados a la CUT, en el 30% de los casos las amenazas de muerte contra los directivos, se extendieron contra sus familiares y, algunas de ellas tuvieron desenlaces en atentados, secuestros y desapariciones de los hijos de los dirigentes. Esta situa-

ción se ilustra con los siguientes casos:

- Las amenazas en mayo del 2003 contra **Magda Beatriz y Ana Paulina**, hijas de **Domingo Tovar Arrieta**, director del departamento de derechos humanos de la CUT, directiva nacional,
- Las amenazas en febrero del 2003 contra la familia de **Gladis Bajara**, presidenta del Sindicato del Círculo de Reporteros Gráficos,¹⁶
- La amenaza del bloque central de las AUC, en mayo del 2003, contra los líderes sindicales de la USO y sus familiares,
- Las amenazas contra el hijo de **María Clara Baquero**, presidenta nacional de Asodefensa, y,
- La desaparición de **Marlon Mina Gambi** hijo de un dirigente de la Unión Sindical Obrera, y el secuestro y tortura de **David José Carranza** hijo de **Limberto Carranza** dirigente sindical de Sinaltrainal, el 10 de septiembre de 2003.

Los cuadros siguientes nos ilustran en términos estadísticos esta situación.

Total de violaciones en Colombia según la central sindical a la que están afiliados los trabajadores entre enero 1º y diciembre 31 del 2003

Central	Nº de casos
CUT	599
CGTD	2
No Confederado	16
Total	617

Fuente: ENS.

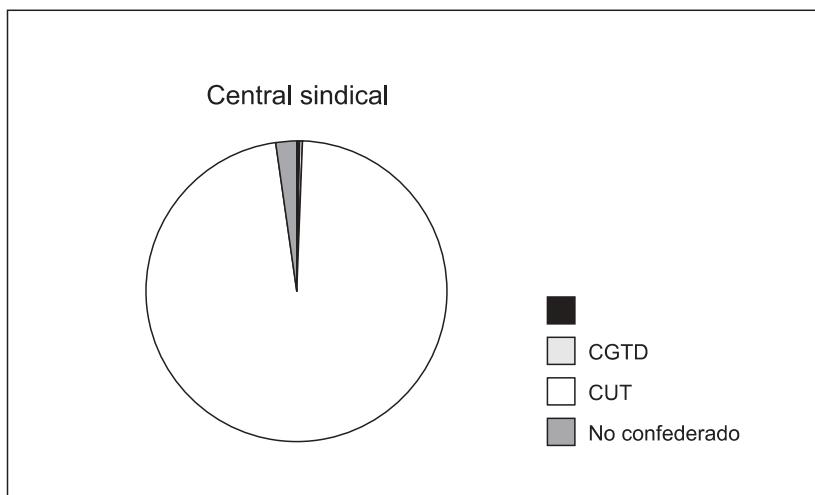
16. Esta amenaza fue dirigida por grupos paramilitares en un comunicado que encabezaba así: “*Muerte a sindicalistas y defensores de libertad de prensa...*”

**Total de violaciones según el sector económico
en que laboran los trabajadores
entre enero 1º y diciembre 31 del 2003**

Sector	Nº de casos	%
Sector servicios	433	70,1
Minas y canteras	86	13,9
Industria manufacturera	23	3,72
Electricidad	31	5,02
Comercio	12	1,94
Agricultura	25	4,05
Construcción	1	0,16
Transporte	4	0,64
Financiero	2	0,32
Total	617	100

Fuente: ENS.

Violaciones por central sindical



Fuente: ENS.

Total de violaciones según el sector servicios de los trabajadores, entre enero 1º y diciembre 31 del 2003

Sector	Nº de casos	%
Educación	363	83,8
Salud	15	3,46
Trabajadores municipales	20	4,61
Otros	35	8,08
Total	433	100

Fuente: ENS.

8. Presuntos responsables

La situación que se ha presentado hasta aquí ha sido, de manera reiterada, objeto de recomendaciones, observaciones, debates y pronunciamientos por los distintos organismos de control de la OIT, por las diferentes instancias del sistema de la Organización de los Estados Americanos y por organizaciones sindicales internacionales. La preocupación permanente de estos organismos sigue contrastando con los pocos signos de mejoría que se presentan en las cifras sobre violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas y en las restricciones legales y materiales para el pleno ejercicio de los derechos de libertad sindical en Colombia.

A la recurrencia de los asesinatos y demás actos de violencia contra los sindicalistas colombianos, se le suma la preocupación por la impunidad en

que permanecen la mayoría de las violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia. Muchos de los homicidios no son investigados porque se desconoce el responsable o porque el sindicado es considerado por los investigadores como un miembro de un grupo armado ilegal.

A esta impunidad casi absoluta, le ayuda el hecho de que el gobierno colombiano no toma medidas inmediatas para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos, insistiendo en señalar que la violencia sindical es una consecuencia del estado de guerra que vive el país, y no el resultado de una violencia selectiva y discriminada contra los trabajadores y sus organizaciones.

De las 617 violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad, 422 (68%) han quedado en la impunidad porque

no se conoce o no se ha denunciado al autor. Igual situación se presenta respecto de los 90 homicidios de sindicalistas: En 74 casos (82%), no se conoce o no se suministra información respecto del autor o responsable del hecho. Se sabe que las organizaciones paramilitares son responsables de

87 amenazas de muerte (29.5%) y 14 homicidios de sindicalistas (15.6%); que las organizaciones guerrilleras los son de 2 homicidios, 7 amenazas de muerte y 2 secuestros; y que la Fuerza Pública es responsable de la totalidad de las detenciones, retenciones y de los allanamientos.

Responsabilidad en las violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia entre enero 1° y diciembre 31 del 2003

Tipo de violación	Paramil.	Guerrilla	Sindato	OSE*	Total
Homicidios	14	2	74	-	90
Amenazas	87	7	201		295
Atentados	2	-	9	9	20
Secuestro	3	2	1		6
Hostigamiento	1	-	44	10	55
Desaparición Forzada	2	-	4	-	6
Detención arbitraria	-	-	-	42	42
Desplazamiento forzado	2	-	89	-	91
Allanamiento	-	-	-	12	12
Total	111	11	422	73	617
%	17,99	1,78	68,3	11,66	100

* OSE: Organismos de seguridad del Estado. Fuente: ENS

9. Propuestas y conclusiones

Igual que el año anterior queremos insistir sobre la necesidad de adelantar acciones contundentes por parte del Estado colombiano, el movimiento de

derechos humanos y el sindicalismo internacional para proteger la vida y la integridad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores sindicalizados. En este sentido nos atrevemos a insistir en la necesidad de:

- Establecer una misión permanente en el país de observación, monitoreo y acompañamiento del sindicalismo colombiano por parte de las confederaciones y secretariados internacionales, que tome la forma de un protectorado sindical internacional sobre Colombia.
- Que el programa de cooperación técnica de la OIT para Colombia se acompañe de una misión permanente con un amplio mandato que le permita hacer monitoreo y de pronunciamientos públicos sobre el cumplimiento por parte del gobierno colombiano de las recomendaciones de los órganos de control y del Consejo de Administración.
- El establecimiento de la comisión de encuesta para Colombia.
- Establecer formas para hacer seguimiento a las recomendaciones y observaciones promulgadas por la OIT.
- Finalmente la necesidad una comisión mixta, nacional e internacional, de expertos pueda conocer en detalle el estado de los procesos judiciales contra los autores de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, recomendar acciones para su esclarecimiento y monitorear el estado de las investigaciones por esos crímenes.

Anexos

Hechos del 2003

El 11 de enero fue asesinado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, el profesor **Jamil Mosquera Cuesta**, quien había recibido amenazas de muerte. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia –Adida–.

El 15 de enero la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación con sede en Bogotá, departamento de Cundinamarca, decretó medida de aseguramiento contra **Hernando Hernández**, abriendo el expediente N° 1127-B, en el que se acusaba de tener nexos con los grupos insurgentes. Es un dirigente sindical que se desempeñó como secretario de asuntos internacionales de la Unión Sindical Obrera –USO–, y fue pre-

sidente de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT–. Se ha distinguido como un defensor de los intereses de la nación, en especial con Ecopetrol y sus trabajadores.

El 11 de enero en el municipio de Tame, departamento de Arauca, fue asesinado **José Marcelino Díaz González**. Pertenecía a la Asociación de Educadores del Arauca, –Asedar–. Fue un educador destacado por su liderazgo sindical, comunitario y pedagógico.

El 18 de enero fue allanada la residencia de **Policarpo Camacho** y su compañera **Gloria Holguín**, dirigentes del Sindicato Agrícola del municipio de Calarcá, departamento del Quindío. Ambos fueron

detenidos y presentados en los medios de comunicación como propietarios de una clínica de las Farc.

El 21 de enero fue asesinado en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, **Abelardo Barbosa Páez**. Pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, –Sintrainagro–.

El 24 de enero fue asesinado en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, **Luis Hernando Caicedo**. Pertenecía a la Unión de Motoristas y Trabajadores de la Industria del Transporte, –Unimotor–.

El 2 de febrero fue retenido por miembros de la policía secreta en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, **Robinson Beltrán Herrera**, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Corelca –Sinraelecol –Corelca–. El 3 de febrero fue asesinado el secretario de educación del municipio de Bello, departamento de Antioquia, **Luis Eduardo Guzmán Álvarez**. Pertenecía a la Asociación de Educadores de Antioquia, –Adida–. Durante varios años fue dirigente de esta organización, rector de varios colegios, presidente, secretario y miembro de la Secretaría de Educación de ese municipio. También fue miembro del Concejo de Bello.

El 8 de febrero fue asesinado por paramilitares en el municipio María La Baja, departamento de Bolívar, el docen-

te **Humberto Ramos Martínez**. Pertenecía al Sindicato Único de Educadores de Bolívar, –Sudeb–.

El 9 de febrero fue asesinado en el municipio de Ciénaga, departamento de Magdalena, **Luis Antonio Romo Rada**. Era el presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales.

El 13 de febrero fue asesinada en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, la docente **Luz Mery Valencia**. Pertenecía a la Asociación de Educadores del Putumayo, –Asep–.

El 14 de febrero fue asesinada en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, **Ana Delia Soto López**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–.

El 17 de febrero fue amenazada la presidenta del Sindicato del Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos, **Gladys Barajas**, en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, mediante un sufragio y una carta donde se amenaza a todo su núcleo familiar.

El 19 de febrero fue asesinada en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, **Maritza Ortega Serrano**. Pertenecía a la Asociación de Educadores del Cesar, –Aducesar–.

El 20 de febrero fue secuestrado en el municipio de Bituima, departamento de Cundinamarca, el licenciado **Juan Antonio Bohórquez Medina**. Fue encontrado asesinado tres días después. Perte-

necía a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, –Adec–.

EL 21 de febrero fue asesinado en la ciudad Cali, departamento del Valle del Cauca, **Fredy Perilla Montoya**. Fue miembro activista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, –Sintraemcali–.

El 24 de febrero fue asesinada en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, la docente **Bertha Awazacko Reyes**. Pertenecía al Sindicato de Maestros de Boyacá, Sindimaestros–.

El 25 de febrero fue asesinado en el municipio de Bello Horizonte, departamento del Cesar, el educador **Rufino Maestre Gutiérrez**. Pertenecía a la Asociación de Educadores del Cesar, –Aducesar–.

El 26 de febrero, las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, hicieron varias amenazas contra los miembros del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia. En ellas se declaran objetivo militar inmediato: **Jose Múnera Ortega**, presidente de la junta directiva nacional; **Antonio Flórez**, secretario intersindical e integrante de la comisión de derechos humanos de la junta nacional; **Luis Otálvaro Amazara**, secretario general de la junta directiva nacional; **Elizabeth Montoya y Norberto Moreno**, presidenta y activista respectivamente de la subdirectiva de Medellín; **Bessi Pertuz**, vicepresidenta y responsable de la comisión

de derechos humanos de la junta directiva nacional; **Luis Ernesto Rodríguez**, presidente de la subdirectiva de Bogotá; **Álvaro Vélez**, presidente la subdirectiva de Montería; **Mario José López Puerto**, tesorero de la junta directiva nacional, **Álvaro Enrique Villamizar Mogollón**, presidente de la subdirectiva de Ibagué; **Ana Milena Cobos**, secretaria de derechos humanos de la subdirectiva de Fusagasugá; **Carlos González y Ariel Díaz**, fiscal y secretario de derechos humanos respectivamente de la subdirectiva de Cali. Además **José Aristides Arango**, **José Eurípides Delgado**, **Rosmery Estupiñán**, **Mauricio Rivera**, **Luis Alejandro Díaz**, **Julián Lozano**, **Mauricio Pinto** y **Príncipe Gabriel González**. Para el 26 de noviembre del 2003 se reporta que las amenazas continúan.

El 27 de febrero fue asesinado en el municipio de Chimila, departamento del Cesar, el educador **Jairo Echávez Quintero** afiliado a la Asociación de Educadores del Cesar, –Aducesar–.

El 1 de marzo fue detenido **Samuel Morales**, presidente de la subdirectiva de la CUT en Arauca. Fue dejado en libertad gracias a la prontitud de la denuncia y a la presión realizada por distintas ONG defensoras de derechos humanos.

El 5 de marzo fue amenazado de muerte el directivo sindical **Roberto Borja Rubiano**, en la ciudad de Barranquilla departamento del Atlántico. Pertenece a

la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Públicos, –Fenansitrap–.

El 5 marzo fue allanada la vivienda de **Teresa Báez Rodríguez**, presidenta de Sintraclínicas en Bucaramanga, filial de la CUT. Es compañera permanente del directivo nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria y Materiales de la Construcción, Miguel Sierra. Teresa fue detenida y acusada por la Fiscalía del delito de rebelión. En el año 2002, había sido víctima de un intento de secuestro y de reiteradas amenazas de muerte. El 20 de febrero de 2003, un sujeto intentó agredirla a la salida de la clínica donde trabaja en Bucaramanga. También se denunció que en más de una oportunidad, el director de la clínica de Bucaramanga, ha intentado levantarle el fuero sindical.

El 13 de marzo fueron amenazados **Wilson Castro, Edwin Molina y Dean Santos** en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. Son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de los Alimentos –Sinatrainal–. Recibieron una llamada en la secretaría del sindicato en la que se les anunciaba que habían sido declarados objetivo militar, que su tiempo en la organización sindical se había acabado y que la sede sería volada con todos lo que estuvieran dentro.

El 8 de marzo fue asesinado por paramilitares en el municipio de Arauca, depar-

tamento de Arauca, el docente **Luis Alfonso Grisales**. Pertenecía a la Asociación de Educadores de Arauca, –Asedar–.

El 12 de marzo fue asesinada en el municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, la docente **Soraya Patricia Díaz**. Pertenecía al Sindicato de Educadores de Risaralda, –Ser–.

EL 20 de marzo fue asesinado en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, **Alejandro Torres**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–.

El 28 de marzo fue asesinado en el municipio de Norcasia, departamento de Caldas, el educador **José Rubiel Betancur Ospina**. Afiliado al Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, –Educal–.

El 7 de abril fue asesinada en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, **Cecilia Salas**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores del Departamento, –Sintradepartamento–.

El 7 de abril fue asesinado en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, el educador **Evelio Salcedo Taticuán**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Nariño, –Simana–.

El 8 de abril fue asesinada en el municipio de Samaná, departamento de Caldas, la docente **Luz Estella Calderón**. Pertenecía al Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, –Educal–.

El 21 de abril fue secuestrada por personas que se identificaron como miembros

del ELN, la educadora **Ana Cecilia Duque**, en el municipio de Cocorná, departamento de Antioquia. Fue asesinada el 26 del mismo mes. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia, –Adida–.

El 24 de abril fue asesinada en el municipio de Anserma Nuevo, departamento de Caldas, la docente **Luz Estella Zapata Cifuentes**. Pertenecía al Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, –Educal–.

El 1º de mayo fue asesinado en el municipio de San Martín, departamento del Cesar, **Juan Gómez**. Era el presidente de la subdirectiva de Sintrainagro en ese municipio. Este sindicato se encontraba en pliego de peticiones y había votado la huelga el 28 de abril.

El 5 de mayo fue asesinado en el municipio de Palermo, departamento del Magdalena, **José María Ruiz Sara**. Pertenecía al Sindicato de Educadores del Magdalena, –Edumag–.

El 6 de mayo fue asesinado en el municipio de Tame, departamento de Arauca, el educador **Juan Manuel Monsalve Niño** junto con su esposa, padres de dos niños de 2 y 4 años. El profesor pertenecía a la asociación de educadores del Arauca, –Asedar–.

El 7 de mayo fue asesinado en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, **Ómar Alexis Peña Cárdenas**. Pertenecía a la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander, –Asinort–.

El 7 de mayo fue asesinado en el municipio de Chimá, departamento de Córdoba, el educador **Ramiro Manuel Sandoval Mercado**. Pertenecía a la Asociación de Maestros de Córdoba, –Ademacor–.

El 8 de mayo fueron víctimas de una carga explosiva de alta potencia en la planta de tratamiento de agua potable de las Empresas Municipales de Cali, –Emcali– de Puerto Mallarino, departamento del Valle del Cauca, **Nelson López, Wílmer Vergara y Jorge Vásquez**. Pertenecían al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, –Sintramcali–.

El 8 de mayo fue asesinado en el municipio de Supía, departamento de Caldas, el educador **Jorge Eliécer Moreno Cardona**, luego de haber sido víctima de un atentado. Pertenecía al Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, –Educal–.

El 11 de mayo fue asesinado en el municipio de Garzón, departamento del Huila, el educador **Héctor Jaime Victoria Sterling**. Pertenecía al Sindicato de Educadores del Huila, –Adh–.

El 15 de mayo fue asesinado en el municipio de Paratebueno, departamento de Cundinamarca, **Ángel Alonso Parrao Parrao**. Pertenecía al sindicato de trabajadores de la electricidad de Colombia, –Sinraelecol–.

El 24 de mayo fue asesinado en el departamento del Atlántico **Luis Oñate Henríquez**. Pertenecía al sindicato de tra-

bajadores de la electricidad de Colombia, –Sinraelecol.–

El 31 de mayo fue asesinada en el municipio de Uramita, departamento de Antioquia, **María Rebeca López Garcés**. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia, –Adida–. La docente era madre de un niño de 3 años.

El 3 de junio fue asesinada en el municipio de Arauca, departamento de Arauca, **Nubia Cantor Jaimes**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–.

El 8 de junio fue asesinado en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, **Jorge Eliécer Suárez Sierra**. Pertenecía a la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander, –Asinort–.

El 16 de junio fue asesinado en el municipio de Tame, departamento del Arauca, la trabajadora de la salud **Morelly Guillén**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–.

El 17 de junio fue asesinado en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, **Orlando Fernández**. Perteneciente a Sindicato de Trabajadores de la Empresas Públicas al Servicio del Estado, –Sintraemsdes–.

El 17 de junio fue asesinado en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, **Luis Humberto Rolón**. Pertenecía al Sindicato de Vendedores de Apuestas.

El 19 de junio fue brutalmente asesinada en la plaza pública del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, la directora de la Escuela Rural Mixta "Ospina Pérez" **Liliana Caicedo Pérez**. Era reconocida como una gran líder social. La directora se había desplazado hasta el corregimiento Junín a reclamar la libertad del párroco de Altaquer, que fue secuestrado por paramilitares junto con un docente de su institución. Pertenecía al Sindicato del Magisterio de Nariño, –Simana–.

El 20 de junio fue asesinada en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, **Fanny Toro Rincón**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–.

El 1º de julio fue asesinada en el municipio de Anserma Nuevo, departamento del Valle, la educadora y líder de la región **María Orozco**, junto con su esposo. La docente pertenecía al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, –Sutev–.

El 3 de julio fue asesinado en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, **Rafael Ángel Mesa Aguilar**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores Oficiales de los Municipios de Antioquia, –Sinraofan– y se desempeñaba como tesorero de la subdirectiva del sindicato en ese municipio.

El 4 de julio fue asesinado en el municipio de Saravena, departamento de

Arauca, el docente **Pedro Germán Flórez**. Pertenecía a la asociación de educadores del Arauca, –Asedar–.

El 15 de julio fue asesinado en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, el señor **Marco Túlio Díaz**. Pertenecía a la Unión Sindical Obrera, –USO–.

El 15 de julio fue asesinado en el municipio de Santa Bárbara, departamento de Antioquia, el activista **José Álvarez Bedoya**. Perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, –Sutimac–.

El 15 de julio fue asesinado en el municipio de Natagaima, departamento del Tolima, **Alberto Márquez**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, –Sintragitol–.

El 19 de julio fue asesinada en el municipio de Tulúa, departamento de Valle, **María del Socorro Núñez**. Pertenecía al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, –Sutev–.

El 23 de julio fue asesinado por paramilitares, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, **Carlos Barrero Jiménez**. Era enfermero del Hospital General de Barranquilla y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–. El presunto autor del homicidio es el denominado grupo paramilitar “Muerte a Sindicalistas –Masín–”.

El 24 de julio fue asesinado en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, **Juan Carlos Ramírez Rey**. Pertenecía

a la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Penitenciario y Carcelario.

El 24 de julio fue asesinada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, la docente **Yolima Herrera García**. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia, –Adida–.

El 1º de agosto en Arauca, la Asociación de Educadores del Arauca, –Asedar– presentó un informe sobre la situación de los docentes en el departamento, denunciando en él que tienen 87 maestros amenazados y desplazados que se encuentran bajo el amparo del Comité Especial de Docentes Amenazados y están reubicados fuera del departamento de Arauca, y que tienen 36 desplazados internamente.

El 15 de agosto se denunciaron las amenazas contra la vida de **Mauricio Álvarez, Víctor Jaimes, Juvencio Serpa y Elkin Menco** en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, pertenecientes a la Unión Sindical Obrera, –USO–. A estos cuatro miembros del sindicato les llegó un sufragio donde reza que es decisión del grupo armado Muerte a Dirigentes de la Unión Sindical, –MDU–: “dar de baja a las personas en mención, quienes serán ejecutados por la organización”.

El 9 de agosto fue asesinada en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, **Marleny Stella Toledo**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores

dores de la Salud, –Anthoc–.

El 10 de agosto fue asesinada en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander, **Victoria Jaimes**. Era auxiliar de enfermería, secretaria de prensa y propaganda, miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Salud, –Anthoc–. El día anterior a su asesinato había sido raptada por miembros de grupos paramilitares.

El 10 de agosto fue asesinada en la vía entre Popayán y Timbío, la educadora **Lina Mamian**. Pertenecía a la Asociación de Institutores del Cauca, –Asoinca–.

El 15 de agosto fue asesinado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, **Dennis Herrera de Villa**. Pertenecía a la Asociación de Educadores del Atlántico, –Adea–.

El 16 de agosto fue asesinada en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, **Luz Marina Vanegas**. Perteneciente a la Asociación de Institutores de Antioquia –Adida–.

El 17 de agosto fue asesinado por paramilitares en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, el educador **Miguel Rojas Quiñónez**. Pertenecía al Sindicato de Educadores de Santander, –SES–.

El 19 de agosto fue asesinada en el municipio de Alejandría, departamento de Antioquia, **Flor María Vargas**. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia, –Adida–.

El 21 de agosto fue asesinado en el municipio de San Sebastián, departamento de Cauca, **Fredy Buenaventura Cruz**. Pertenecía a la Asociación de Institutores del Cauca, –Asoinca–.

El 3 de septiembre en el municipio de Ponedera, departamento del Atlántico, fueron hallados los cuerpos despedazados con motosierra de los campesinos **José Rafael Fonseca Cassiani**, **Ramón Fonseca Cassiani** y **César Augusto Fonseca Morales**. Eran hermanos y pertenecían al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Atlántico.

El 4 de septiembre fue asesinado en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, **Iván Manuel Muñiz Bermúdez**. Pertenecía a la Asociación de Educadores de La Guajira.

El 10 de septiembre fue amenazado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, **Limberto Carranza**. Ex miembro de Sinaltrainal. Su hijo de 15 años fue torturado mientras le preguntaban por el paradero de su padre, trabajador de Coca-cola. Ese mismo día llamaron a su casa para proferirle amenazas y maltratarlo verbalmente.

El 15 de septiembre fue asesinado por paramilitares en el municipio de Algeciras, departamento del Huila, el educador **Germán Charry Cabrera**. Pertenecía a la Asociación de Educadores del Huila, –Adih–.

El 15 de septiembre fue asesinada en el corregimiento de San Antonio de Pra-

do, municipio de Medellín, departamento de Antioquia, la docente **Margot Londoño**

Medina. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia, –Adida–.

El 17 de septiembre fue asesinado en el municipio de Villarrica, departamento del Tolima, **Renzo Vargas**. Pertenecía a la Federación Colombiana de Educadores, –Fecode–.

El 19 de septiembre fue asesinada en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, la educadora **Dora Melba Rodríguez Urrego**. Pertenecía al Sindicato de Educadores del Tolima, –Simatol–.

El 20 de septiembre fue asesinado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, **Wilson Peluffo**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Lechera.

El 25 de septiembre en el municipio de Morroa, departamento de Sucre, fueron asesinados los educadores **Nelly Herazo Rivera** y su esposo **Abel Ortega Medina**. Pertenecían al Sindicato de Educadores de Sucre, –Ades–.

El 26 de septiembre fue asesinado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, **Rito Hernández Porras**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales, –Sintraecass–.

El 3 de octubre fue asesinado en el municipio Segovia, departamento de Antioquia, el presidente del Sindicato de la Frontino Gold Mines, **Luis Carlos Olarte Gaviria**. A este hecho se le suma el atentado al anterior vicepresidente del sin-

dicato de la empresa minera, en agosto del mismo año.

El 4 de octubre fue asesinado en el municipio de La Unión, departamento de Antioquia, el docente **José Ángel Mejía Ríos**. Pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia, –Adida–.

El 22 de octubre fueron amenazados los miembros de la **Central Unitaria de Trabajadores –CUT–**, en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. Las reiteradas amenazas, persecuciones y hostigamientos que se realizan a través de panfletos, son enviados por el grupo “Muerte a Sindicalistas –Masin–” (ya mencionado), y las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. Posterior a las amenazas y a través de llamadas y más panfletos, los victimarios les han concedido un plazo de 10 días para abandonar la región. Las amenazas han sido dirigidas directamente contra los dirigentes de la subdirectiva de la CUT de Risaralda, del Sindicato de Educadores de Risaralda, de la Unión de Motoristas y Trabajadores de la Industria del Transporte, –Unimotor– y del Sindicato de Vendedores Ambulantes, y, de manera inmediata y tajante, a **Bernardo Bernal Álvarez** y **Antonio José Ramírez**. En este panfleto del 22 octubre, amenazan de muerte a 10 dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos y miembros de organizaciones políticas. Los dirigentes se ven obligados a vivir encerrados en lugares ocultos.

El 3 de noviembre fue asesinado en el municipio de Pueblo Viejo, departamento del Magdalena, **Evertó Fiholl Pacheco**. Pertenecía al Sindicato de Educadores del Magdalena, –Edumag–.

El 5 de noviembre fue asesinada en el municipio de Tenerife, departamento del Magdalena, **Nubia Estela Castro**. Pertenecía al Sindicato de Educadores del Magdalena, –Edumag–.

El 9 de noviembre fue asesinado en el municipio de Villanueva, departamento del Casanare, **Orlando Frías Parada**. Pertenecía a la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, –USTC–.

El 11 de noviembre fueron asesinados en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, **Ricardo Espejo, Marco Antonio Rodríguez, Germán Bernal y José Céspedes**. Pertenecían al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, –Sintragritol–.

El 11 de noviembre fue asesinada en la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, la periodista **Zuly Esther Codina Pérez**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Salud del Magdalena, –Sindes–.

El 11 de noviembre fue asesinado en el departamento del Magdalena, el educador **Jorge Peña Moreno**. Pertenecía al Sindicato de Educadores del Magdalena, –Edumag–.

El 16 de noviembre fue asesinado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, **Mario Sierra Anaya**. Fue

funcionario del antiguo Instituto de la Reforma Agraria –Incora– y miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Reforma Agraria, –Sintradín–.

El 17 de noviembre fue asesinado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, el trabajador **Miguel Ángel Anaya Torres**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Empresas Públicas al Servicio del Estado, –Sintraemsdes–.

El 30 de noviembre fue asesinado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, **Carlos de la Rosa Elles**. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Empresa del Atlántico, –Sintraatlántico–.

El 3 de diciembre fue asesinado delante de su esposa, en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, el educador **José de Jesús Rojas Castañeda**. Pertenecía a la Asociación Sindical de Educadores Municipales, –Asem–.

EL 14 de diciembre fue asesinado en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, **Severo Bastos**. Era miembro de Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Reforma Agraria, –Sintradín–. Hasta hace pocos días era trabajador del Incora en Saravena, departamento de Arauca, y se desempeñaba como fiscal suplente de la junta directiva de la seccional del sindicato en ese departamento.



PEREIRA, 21 DE OCTUBRE DE 2003

COMUNICADO No. 2

SEÑORES DIRECTIVOS

- SUBDIRECTIVA CUT RISARALDA
- S.E.R (SINDICATO DE EDUCADORES DEL RISARALDA)
- UNIMOTOR FILIAL CUT
- INTEGRANTES DEL FRENTE SOCIAL POLÍTICO
- SINDICATO DE VENDEDORES AMBULANTES

Teniendo en cuenta la constante negativa de hecho y de palabra presentada por ustedes los señores (a) Gilotia Inés Ramírez Ríos expresidenta de FECODE, José Vicente Villada presidente de la subdirectiva CUT Risaralda, Bernardo Bernal Álvarez vicepresidente de la subdirectiva CUT Risaralda y presidente del UNIMOTOR seccional Pereira, quienes en actitud y conducta rebelde, incitante y desafiante cumplía por estos tres personajes ante los medios de comunicación el pasado 7 y 8 del presente mes se congratularon buscando del pueblo colombiano y la opinión internacional un total reclamo a nuestras demagogias ultraderechistas quedando sobre el papel y la voz de los hombres inconductos, la huella de odio, temor y sentimientos confusos y encontrados contra nuestra fuerza armada que sólo busca mediante la lucha el camino correcto a la verdad.

Es por esta situación que la célula urbana de paramilitares del bloque calarcá se ha centrado con un lapso de tiempo indefinido en el departamento risaraldense, para fustigar a los lacayos comunistas que creen tener el control de un pueblo confundido con sus políticas izquierdistas desencocadas al verdadero desarrollo humano y progresista de Colombia. He de allí como un grupo numeroso de revoltosos forjadores del desorden social han perturbado constante e incansablemente con sus ideologías baldías y obsoletas a un gran número de compatriotas de la región cafetera. La inconformidad de los gremios y movimientos sindicales del Risaralda en cifras estadísticas es de un gran volumen contra varios patrocinadores legales del libre trabajo, y donde atentan de modo equivoco y berrido contra la libre democracia atacando de lleno, y despotamente las políticas de cambio en nuestra querida y sufrida patria, fortín de insurripitos, guerrilleros financiadores de la desevolución, apartidas, ruticidios sindicales hasta ya, basta ya estamos presentes para acabar con sus fortines.

El bloque cacique calarcá ha llegado, estamos a las puertas de sus moradas sus olofntos huelen nuestra tenida pero a la vez fructífera presencia, no habrá protección, escudo ni escuta que os valga, nuestros fusiles acallarán vuestras conductas hostiles



Y crónicas. El desacato presentado por ustedes al no renunciar y posteriormente abandonar la ciudad les costará muy caro nuestra célula ha sido inducida por el estado mayor conjunto ya que según notificación proferida por el alto rango ustedes los sindicatos textuados han incumplido el plazo que estaba previsto hasta el 10 de Octubre, donde se les ordenaba salir de la ciudad, dicha denegación presentada de su parte ha demostrado de nuevo que sus comportamientos son perjudiciales y malsanos para todo pensamiento ecuánime. Dados todos estos antecedentes empezaremos una campaña de exterminio aniquilando rápidamente a los primeros seleccionados quienes hacen parte del ejemplo desmeritador para todo el pueblo colombiano, y donde ejecutaremos a uno por uno para que sirva de escarmiento ya que les ha parecido muy poco los ajusticiamientos que se llevaron a cabo con algunos directivos de la CUT (UNIMOTOR SECCIONAL Cali, Valle) en meses pasados.

Los siguientes sindicalistas e impulsores de los derechos humanos han sido declarados objetivo militar de primera fase, el primer grupo de tres está conformado así:

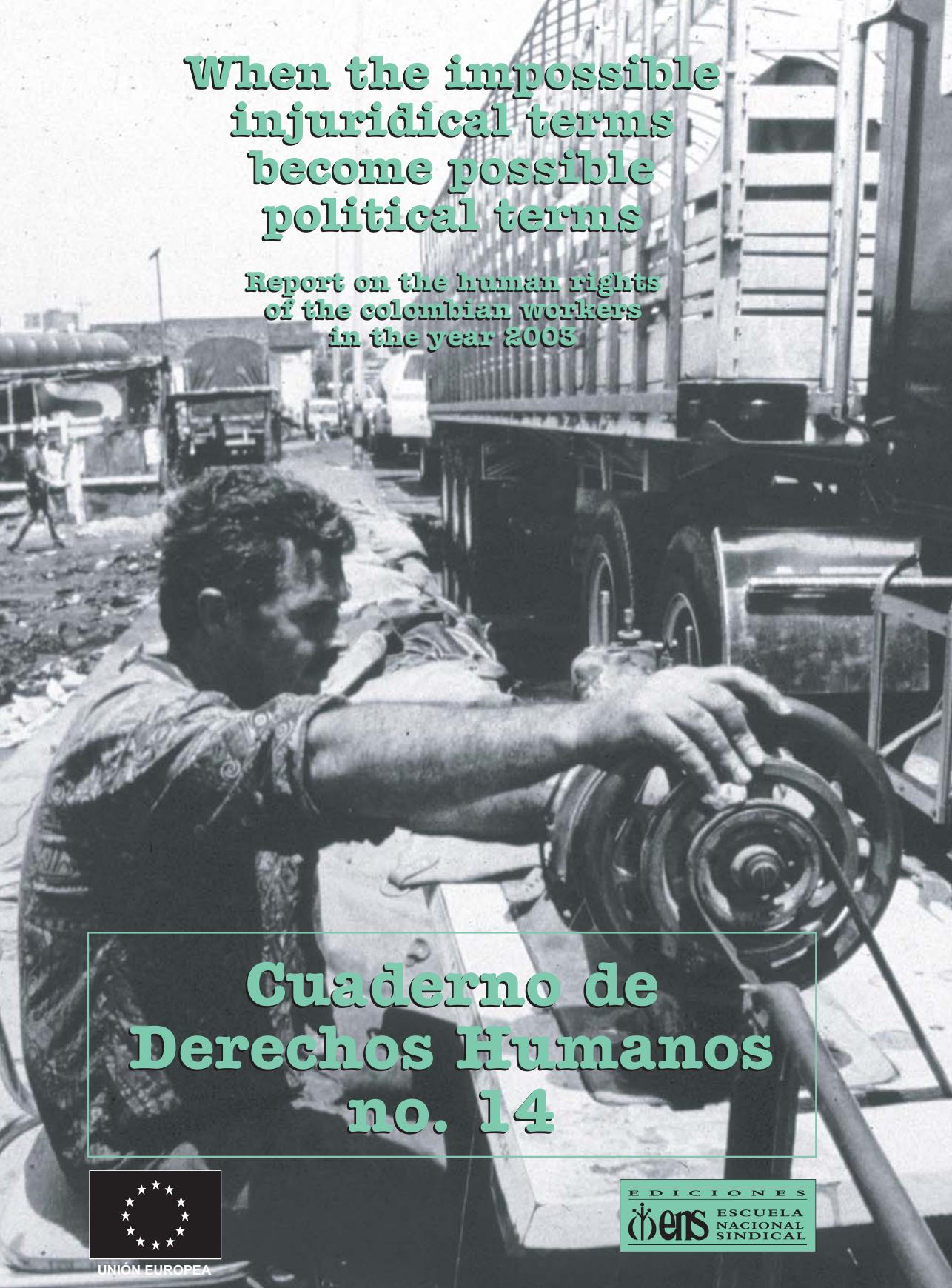
- Jose Vicente Villada Carvajal
- Antonio J. Ramirez Arias
- Bernardo Bernal Alvarez
- Gloria Inés Ramirez Ríos
- Diego María Osorio Montes
- Juan Jairo Louiza
- Ubenny Morales
- Javier Duque Murillo
- William Gaviria Ocampo
- Gustavo Ramirez

Esta lista negra de subversivos camuflados de civil son considerados como plagas que deben ser eliminadas de inmediato, no mas plazos, treguas, ni medidas de diálogo y/o acercamiento alguno del bloque calará para con ustedes, solo tengan en sus sucias mentes al unísono que sus familias deberán afrontar la triste y cruda realidad desde este preciso instante en el que estén leyendo este comunicado sus cabezas tienen un precio en algún lugar, a cualquier hora, día y momento seréis enfocados por nuestras miras, no habrá escudos ni barrera de protección alguna que valga.

Los sindicalistas de Pereira y los mal llamados defensores de los derechos humanos ya están muertos, sus cuerpos divagan aún despidiéndose de todos sus allegados, paz en sus tumbas y por eso entonamos nuestro himno...



**CELULA URBANA BLOQUE
CACIQUE CALARCA**



When the impossible injuridical terms become possible political terms

Report on the human rights
of the colombian workers
in the year 2003

Cuaderno de Derechos Humanos no. 14



UNIÓN EUROPEA

EDICIONES
 ESCUELA
NACIONAL
SINDICAL

When the impossible in juridical terms become possible political terms

**Report on the violation to the human rights
of the colombian union workers, 2003**

Escuela Nacional Sindical
Área de Derechos
Humanos y Laborales

Equipo:
Liliana López Lópera
Guilermo Correa

Medellín-Colombia
Abril 2004

EDICIONES
 ENS ESCUELA
NACIONAL
SINDICAL



Calle 51 N° 51-78

Tel: 513 31 00 - Fax: 512 23 30

Email: coddhlab@ens.org

www.ens.org.co

Asociada a la Federación Internacional de Asociaciones para la Educación de los Trabajadores –FIAET–

ISBN: 958-8207-33-9

Picture: Patricia Velásquez y Edwin Vélez

English translation from the Spanish by:

Darío López,

Professional in languages, University of Antioquia, Colombia

Printed: Medellín-Colombia by Pregón Ltda.

Impreso en papel biodegradable fabricado con fibra de caña de azúcar.

Este documento se ha realizado con la asistencia financiera de la Comunidad Europea. Los puntos de vista que en él se exponen reflejan exclusivamente la opinión de la ENS y, por tanto, no representan en ningún caso el punto de vista oficial de la Comisión Europea.



UNIÓN EUROPEA

**PROGRAMA ANDINO
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
2002-2005**



Content

Colombia before the control mechanisms of ILO in 2003 Norberto Ríos Navarro	5
Report on the violation to the human rights of the Colombian union workers, 2003	11
1. A preliminary reading	11
2. Global figures	14
3. A comparative reading	15
4. Causes of the violence against the Colombian unionized workers in the 2003.	20
5. The violence against women, as a strategy of immobilization ...	23
6. Violations by departments	26
7. Violations against federations and centrals	28
8. Presumed responsible	30
9. Proposals and conclusions	32
Events in the year 2003	33

Colombia before the control mechanisms of ILO in 2003

With more emphasis from 1998, Colombia has been a study object and debate in the different spaces of execution control in ILO: the Commission of Application of Agreements and Recommendations, the Committee of Union Freedom and the Council of Administration. This year, with occasion of the 91 conference of this organization, it was again subject to examination because of violation to the union freedom.

Colombia in the Comission of Norms

The commission of application of agreements and recommendations,

commonly denominated Commission of Norms, is the organism from which the conference of the ILO exercises control on the States in relation to the execution of the obligations incurred constitutionally or for ratification of agreements. This year Colombia, as it has been in almost every year of the last decade, was included in the list of countries that should appear before this Commission, due to its no fulfillment of the agreement 87 on union freedom and right. This disgraceful honor is shared with other 24 countries of the 176 members of the ILO.

Colombia was censored because it did not adapt the legislation to deriva-

tive precepts of the 87agreement, especially in: 1. prohibition of declaration of strikes by federations and confederations; 2. declaration of illegality of the strike by the administrative authorities and not by independent organ, especially in the cases of State employees' strikes; and 3. the non definition of the reach of the concept of essential public services. It was also called to respond for the violence against the unionized workers and for the practice of union freedom that limits the creation of unions, the performance of the union leaders and the collective bargaining and the strike.

The government defended itself saying that the inconsistencies between the agreement and the law are just 3, against 20 in the years 90; that its security and democratic policy is having results, to the point that from the beginning of the government to today the murders of unionized workers have diminished considerably. According to the data, during the year 2003 only 14 people have been murdered against 84 in the 2002, that is to say, a decrease of 84%. For the government, this decrease has explanation in the fight conviction against the violence, in the goods of the program of cooperation of the ILO and in the wide budget that the government has assigned for the protection of the union-

ized workers.

The government called the countries and the ILO to reinforce the support to the cooperation program and called the unionized workers to change their discussion attitude for a collaboration one ; it invited the workers to filter the information before they bring it or to spread it in the international environments; it accused the NGOs of having created a modus veven di from the hard realities of Colombia and invited them to change their role and be devoted to strengthen the idea of a syndicalism of collaboration and of participation instead of recovery and confrontation.

The workers in the commission presented a pathetic table of the situation of violence against the unionized workers and the limitations to the exercise of the union freedom; they made the government responsible for this situation and the impunity of violence cases against the unionized workers. They requested the commission to stand out in a special paragraph the case summations and to invite the Administration Consulate so that it solves the application of a Survey Mission for Colombia.

The graveness of the topic led to a numerous and unusual intervention of governments: most Europeans criticized very hard the government be-

cause of the continuous situation of violence and impunity of the criminal acts against the unionized workers, and because of the Colombian government's reluctance to complete the adaptations from its legislation according to the agreements; USA expressed its concern for the violence, convinced that the Colombian government is doing right; and the Latin American countries supported the Colombian government.

The spokesman of the employers recognized the difference between the agreement and the law but, as the government said, he pointed out that these are already few in relation to the last situation; he made a call to the government to carry out efforts that diminish the impunity, and to the members of the commission to not supporting measures that weaken the actions and the government's efforts in the resolution of the violence, like the special paragraph or the Commission of Survey.

Finally a conclusion was edited that recognizes the inadequacy of the internal legislation to the agreement, the practice of limitations to the exercise of the union activity; the violence against the unionized workers and the impunity of the authors. There the government is urged to take with urgency the necessary measures so that

the situation of insecurity ceases and so that the unionized workers can freely exercise the rights recognized by the agreement 87 and take immediate measures to guarantee the full execution of the agreement in the legislation and in the practice. Finally it requests the government to present a detailed memory, with the answers to the comments of the union organizations, so that the commission can examine the situation in its next meeting.

This conclusion didn't include the request of the workers of special paragraph as a consequence of the indolence of the managers with the situation of the Colombian unionized workers, for the government and managerial solidarity prevailed in them. This managerial behavior evidenced an attitude of partiality and the application of different parameters according to countries, they were hard and demanding with situations like those of Cuba and Venezuela and obliging with the government's behavior and the Colombian managers

In summary, the session finished in a discussion and a bigger political tension than expected, the government entered very confident, hopping to find a calmed atmosphere, little criticism and a lot of governmental support. It was just the opposite, the situ-

ation of Colombia, motivated by all the information and documents distributed, produced such a negative feeling and the workers' solidarity and concern among the governments that they saw the necessity to arbitrating and getting the Colombian government's attention about the necessity of carrying out bigger efforts in order to improve the situation of the Colombian syndicalism. The solidarity that the Colombian government expected was not given, on the contrary, it should face the workers' very strong questions, the silence of the governments from which it expected to be in its side. The sensation of defeat of the government and managers was clear, as its indignation for the capacity of lobby of the unions and the Colombian NGO.

The government overconfidence was beaten. It has already clear that the syndicalism is not alone, and that the solidarity and concern is not only from the international syndicalism, but from governments, among others, the Nordic and the Low Countries. The same ILO expressed its concern again for the reactions that generates its slowness and exaggerated discretion with the Colombian case; its procedures propitiate criticism as well as reflections on the importance of the procedures and control organs.

Colombia in the Administration Concil

In June 1998, a significant group of workers presented a complaint, before the conference of the organization, against the Colombian government for the violence exercised against the syndicalism, expressed in hundreds of unionized workers murdered, threatened and violently displaced from their houses and work places. They requested the designation a Commission of Survey to study the accusations made against the Colombian government.

The Council of Administration approached the study of this complaint in several occasions and it obviated the naming of the Commission of Survey, first, sending a mission of contacts (February of 2000), naming a General Director as a special delegate for a year (June of 2000) and then setting a special program of technical cooperation (June of 2001). All these measures have been fruitless with regard to the situation of violence, for they have not stopped the systematic violence against the unionized workers, especially against their leaders.

Supported in the uselessness of the substitute measures of the Commission of Survey, the delegation of the present Colombian workers in the conference of June of this year, and in

an unanimous and unified way (element that it is necessary to stand out in comparison with previous performances) decided to request the administration Council the naming vote of the Commission of Survey. The application was given in a favorable atmosphere to the Colombian government, product of the diplomatic action carried out between governments and employers, since they expressed the unsuitability for the naming of the Commission of Survey, they consider it as a hostile act with the government and an instrument that obstructs Uribe's efforts to improve the situation of violence in the country and the unionized workers. On the contrary, they really expect that the program of technical cooperation in development contributes to improve the situation of violence against the unionized workers. Moreover, the union delegation should have considered the workers delegate's doubts in the Council of Administration on the relevancy of forcing the voting in such circumstances and in solidarity with the Colombian government.

Knowing this unfavorable atmosphere, they kept in mind the matter in consideration before the Council of Administration to be solved once and for all, since the previous measures didn't focus on demanding the execu-

tion on behalf of the government and the managers, their protection duties and respect to the union activity and its leaders. The voting was solved with 36 against and 15 in favor of the Commission of Survey (the 14 working delegates and the government delegate of Sudáfrica) and two abstentions (Norway and Canada).

The decision means a great relief for the managers in the uneasy atmosphere generated by the eventual naming of a survey commission. Its acceptance would have implied the recognition of a serious situation of violation of the commitments acquired in the constitution and in the agreements of the ILO. Besides, the investigation itself, and especially the non execution of the recommendations of the Commission would have brought consequences in the dynamics of the business. The government was also favored at being accepted its request of a certain period of time to demonstrate its good will of collaboration and the effectiveness of its policies as well as at getting the support from a significant number of governments.

The negative to name the Commission of Survey doesn't mean that this mechanism be closed for the workers. In any moment they can make use of it, and will surely do, since the cases of violation to the ex-

ercise of the union freedom, the government's active polities against the unions and their bargaining right are being increased, and that the indulgence with the managers' anti union attitude is total. An eventual new application of Commission of Survey should have a strategy of publicity and lobby supported by the government delegates and agreed with the world union centrals present in the Conference of the ILO.

Finally it is necessary to say that the non approval of the Commission of Survey doesn't mean that government and managers have been released from their responsibilities of respect to the commitments of the agreements signed by Colombia before ILO nor that the control procedures have ceased. The Commission of Norms and the Committee of union freedom continue verifying the execution of their observations and studying the workers' complaints.

Colombia in the Committee of Union Freedom

Besides the interventions motivated by the Commission of Experts in the Commission of Norms and by the delegates of the workers before the Conference and before the Council of Administration, the Colombian government and the managers were questioned by dozens of unions which in a direct way or through national and even international organizations complained before the Committee of Union Freedom because of multiple and serious violations to the union freedom. This Committee has been subject to the most diverse complaints in the last years, and there is a very high percentage of the cases to study coming from Colombia, which tells the generalized and serious situation of the violation to the rights in the country.

Luis Norberto Ríos Navarro
General Director
Union National School

Report on the violation to the human rights of the Colombian union workers, 2003

1. A preliminary reading

In the last 12 years, 2.028 unionized workers have been murdered in Colombia. It may be hyperbolic to name this permanent situation of the violation to the human rights of the unionized workers, with the category of political genocide. We already know that the situation of the Colombian syndicalism doesn't evoke nor legally equals this concept. However, skimming through the pure severity of the international juridical system, it could be said that with the thesis of political genocide we simply seek to name the magnitude of a systematic, selective violation, extended in the

time and with impunity of the rights to life, freedom and integrity of the unionized workers and their organizations in Colombia.

From the juridical point of view, it is forced to include those 2.028 murdered unionized workers in the categories of genocide that underlie the traditional classifications of the international system. Nonetheless, it is ethically and politically valid to appeal this concept to denominate practical and historical processes of extermination. From an essentially ethical and political position –and not juridical at all– we dare to point out, possibly incurring in a conceptual al-

teration, that the historical violence against the syndicalism evidences a situation in which the impossible in juridical terms has become possible in political terms; and the unthinkable in political terms has become real.

The passing from the impossible in juridical terms into the possible in political ones allows us to point out the following features of the violence against the syndicalism:

- The crisis of the Colombian syndicalism doesn't refer to the existence of a diffuse and indiscriminate violence, as it is intended to hide the real dimension of the problem. It is, on the contrary, of a crisis marked by the systematic, permanent and selective violations of the human rights of the Colombian workers, in a general context of impunity that corroborates the fragility of our democracy and the gap between that formal country that consecrates the fundamental right to the union association, and that real country where the rights of the unionized workers are permanently violated.
- Most of the violations to the human rights of the unionized workers in Colombia are linked to industrial disputes (strikes, collective bargaining and creation of unions), although they happen in

the context of the war and are made, in most cases, by some of the actors of the war.

- Most of murders, threats, kidnappings and forced displacements of Colombian workers have been carried out in moments marked by the increase of their labor recoveries and, therefore, they are not casual or collateral victims of the armed conflict. In Colombia, the war and the armed actors work as parallel and illegal institutions of regulation of the Colombian industrial dispute.
- The humanitarian crisis of the Colombian syndicalism evidences, among other things, the historical inability of the State to guarantee the full exercise of the rights of union freedom and, in many cases, the handing its mediation functions over private agents or armed organizations out of law and, fundamentally, the irruption of a vast net of institutions and exchanges among legal and illegal organizations that fulfill the function of regulating the labor disputes through the use of intimidation, weapons and terror.

These explanations and the magnitude of the violence against the syndicalism can be illustrated pointing out some essential aspects of what could

be denominated the logical and chronological plot of the violence against the syndicalism. For the Union National School such violence presents as central inflection points the following landmarks:

- The period 1991-1995 was determined by the war against the agriculture and, specifically, the war against the unionized agricultural workers of Sintrainagro in the banana area of Urabá.
- The year 1996 was marked by the increase of the murders of the workers in Colombia. This year presents the biggest index of homicides against unionized workers, the biggest number of murders to workers in massacres and the biggest number of violations to the human rights of the workers in the country. In fact, in this year 284 unionized workers were murdered in the whole country; and 105 of them died in massacres made by the armed actors in the banana area of Urabá. Never mind to remember that the serious humanitarian crisis experienced by the syndicalism in the region of Urabá during this year, was the consequence of the confrontations among the Farc, the EPL and the AUC.
- In the year 1997 a process of amplification of the paramilitary
- project is appreciated along the national geography and, therefore, the appearance of new territories disputed by the armed actors. These new territorial disputes is the geographical amplification of the spaces in which the human rights of the workers were violated and the appearance of the phenomenon of the forced displacement of unionized workers. This last one appears as an important instrument of the strategy of war implemented by the armed actors to invade territories and to exercise in them acts of sovereignty.
- In the period that goes from 1998 to the year 2000, the violation of the human rights of the unionized workers was marked by the peak of the intimidations, threats, violations to the rights of union association and murders of high union leaders. The State National Strike, realized between the 7th and 26th of October 1998, closed with a balance of 9 murdered unionists, permanent crashes with the public force, intimidation to the marches of the workers and increase of the repression.
- In the general context of the changes and imbrications between industrial disputes and war, the year 2001 presents an increase of

the violence against unionists , for in that year the biggest incident of leaders' homicides is reported with 63 cases. Parallelly, in that year an increase of the violence of the insurgent organizations is appreciated against workers (especially through kidnappings), the utilization of the armed actors, on the part of municipal administrations, to create favorable contexts of repression to the act of law 617 – referred to the fiscal adjustment of the territorial entities–, and the increase of the violations to the human rights of unionized workers located in the big domestic urban centers (Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga and Medellín), as consequence of the process of urbanization of the armed conflict.

- Finally, this chronological plot shows that in the period 2002-2003, changes are presented in the global logics of relationship between war and industrial disputes. These changes show a positive face as for the decrease of some figures and parallelly, increase in those already traditional forms of

violence against the unionized workers (threats, forced displacement, attacks and harassments).

The following report offers a global information on the violation to the human rights of the union workers in the year 2003 and a comparative and explanatory look of the variations in the last period.

2. Global figures

The information of the Data Base in Human Rights of the Union National School shows that in Colombia, between the first of January and December 31st of the year 2003, 90 unionized workers **were murdered**, **295 were victims of threats of death**, **20 suffered attacks against their personal integrity**, **6 were missing** and **6 more were kidnapped**. To this worrying panorama there are also **42 detained¹ unionized workers**, **12 house breakings to union leaders' residences** and **the 55 cases of harassments to leaders and their families**.

Out of these global figures there are three matters to stand out: in the first place, the outstanding increase of the violations to the human rights of

1. This figure corresponds to the data systematized by the Union National School. However according to the Unitary Central of Workers –CUT–, between January and December of the 2003, 72 unionists were murdered and 300 social leaders were stopped. See: *Comunicado del Departamento de Derechos Humanos de la CUT*, February 2003.

the unionized women. In the year 2002 the women were victims of 31 violations to life, freedom and integrity. In the 2003, 194 cases were reported, that is to say, from one year to another the variation is 600%. Likewise, it is important to point out that the total violations to the human rights of the workers in the 2003, 31% was made against unionized women. This corresponds to 104 threats of death, 27 homicides, 42 displacements, 8 detentions, 8 harassments, 2 kidnappings and 2 house breakings.

In second place, it is important to point out that total of violations to human rights of the workers, 43%, (263 cases), were made against union leaders, members of board of directors, executive committees and sub directives of the union organizations. The total of murdered unionists, 36 were leaders, maintaining the percentage tendency in the decade. The total of the 295 threats of death, 131 (44%) were addressed against top union leaders, 20 leaders more were stopped and 11 were subjected to house breaking in their residences.

Finally, it is important to underline

that the affiliated workers to the Unitary Central of Workers –CUT–, continue being the biggest victims of the violations to life, freedom and integrity. The total of murdered unionists, 84 were affiliated to this organization as well as 99% (294 cases) of the threatened unionists. It is necessary to point out that all the members of the sub-directives of the CUT in the departments of Valle, Arauca, Caldas and Risaralda, received threats of death and therefore many of them had to move and be in exile.²

3. A comparative reading

The panoramic look at the 617 cases of violations to the right to life, freedom and integrity of the unionized workers during the year 2003 shows a change in the modalities of the use of the violence. Going back to the years 2001 and 2002, it is clear that in the 2003 a bigger magnitude was presented in those violations referred to the threats of death, the forced displacement and the privations to the freedom of workers; in contrast, a decrease in the homicides, the kidnappings and the forced missing of

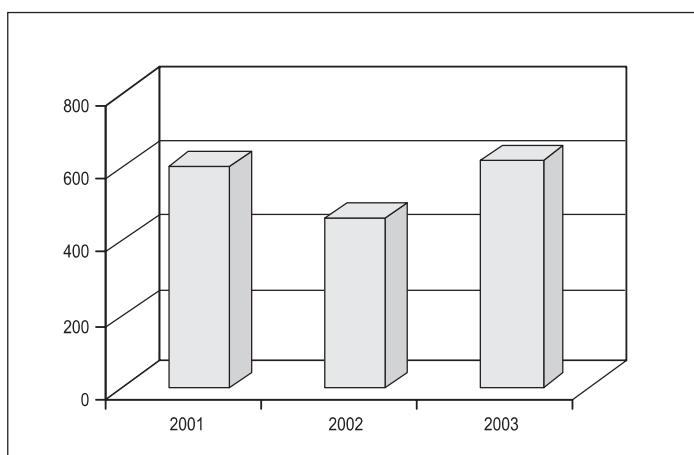
2. It is notorious here a look at the context and the texts of the threats against the sub-directive of the CUT in the department of Risaralda, October 21 and November 11 2003 by the Block Cacique Calarca, of the United Self-defenses of Colombia that operates in the domestic coffee region and the text of the Self-defenses threatening the Directive Meetings of National and sectional Sintraunicol.

unionized workers and, a change in the modalities of the violence. The following table shows, in statistical terms, these comparative variations:

**Violations to life, freedom and integrity of
colombian unionized workers.**
January 1-December 31. 2001, 2002 and 2003

Type of violation	2001	2002	2003
Threats of Death	233	189	295
Homicides	196	184	90
Attack with or without lesions	24	17	20
Missing	12	9	6
House breaking	1	-	12
Detention	7	11	42
Harassment	13	19	55
Kidnapping	41	27	6
Displacement	70	2	91
Torture	1	1	-
Total	598	459	617

Source: ENS



Source: ENS

There are two aspects to stand out from these general figures. In the first place, they show that a change doesn't exist in the general panorama of violation to the fundamental rights of the Colombian workers, for the violations to the human rights of the unionist in the present year respond to the registered tendencies along the period 1991-2002. The existing variations don't alter the history of a selective, deliberate and permanent violence and, fundamentally, they don't transform the persistence of an anti union culture that continues classifying the unionized workers as a threat for the internal order in the country. In Colombia there is a deliberate and calculated intention on behalf of armed and not armed actors to weaken, to end up or to restrict the action of the union organizations.³

In second place, the figures allow us to discover some general changes in the modality of the violations. Specifically, it is clear the decrease of the homicides and the kidnappings and, an increase in the displacement, the attacks, the threats of death and the violation to the human rights of the unionized women. These variations in the modalities, are related with the

changes in the strategies of war, the territorial mobility of the actors, the resolution or decrease of the armed territorial disputes and with the implementation of negotiation processes or agreements between the paramilitary organizations and the government.

With the above-mentioned it is interesting to highlight that the positive variations that are presented in some figures, are not the result of the application of political government deliberately oriented to guarantee and to protect the rights of union association in the country, but the result, quite contingent, of the action logics and the political and strategic calculations of the actors of the armed conflict. The unilateral truce decreed by paramilitary sectors impacted favorably in the reduction of the murders of unionized workers, since they were responsible for most of the homicides of unionized workers. However, this contrasts with the increase of the threats of death uttered by the same armed organizations.

The decrease of 51% in the homicides should be read then, in the general context, as the decrease of the homicides made by paramilitary organizations. Parallelly, the positive

3. A wider look at the tendencies in the violence against the Colombian union movement can be seen in: "Report on human rights of the Colombian unionized workers 1996-2000", *Notebook of Human Rights N° 11*, Medellín, Union National School, March 2001.

variations in other figures should be read according to the changes experienced by the guerrillas in the context of the war deployed by the State. The offensive of the military forces against FARC has impacted positively on some indicators of human rights. For example, the decrease of 77% of the kidnappings can only be understood because of the changes of the guerilla violence; let us remember that in the years 2001 and 2002, such organizations were responsible for 29% (20 cases) of the kidnappings.

On the other hand, it is important to point out that the deterioration of some figures on human rights of unionized workers is the direct result of the strategic action deployed by the State. A global look at the 617 cases of violations to life, freedom and integrity in the 2003 shows, once again, that all those governments whose purpose is to get the peace –or to win the war–, have accompanied their speech of will to peace –or to war–, with a progressive hardening with the actors of the economic and social conflict that are outside of the armed action.

Along the colombian history, the peace –and security– policy presents

a scandalous increase of the repression to the right of union association, the consideration of any union protest as illegal, the harassments of the public force to all protest movement and the increase of the threats to unionized workers in key moments of resolution of industrial disputes. Here it is necessary to remember the detentions and declaratory of restriction to the civic mobilization in 1998 and 1999 (year of the negotiation process with the Farc) and, the increase of the detentions, house breakings and harassments on the part of the public force to the union organizations, in the war strategy context of Alvaro Uribe's government. The current governmental policies with the unions of Telecom, Ecopetrol and the Social Insurance, evidence the existence, just as *The Time* reminded it in its newspaper in May 1st, “a State that dialogues more easily with the armed groups than with the legitimate organizations of the work and that inclines to criminalize the social protest” .

The “legal” detentions, the arbitrary detentions, the house breakings and the harassments⁴ on the part of state’s organisms, constitute infring-

4. According to the Data Base of the Union National School the following unionized workers, among others, were stopped and linked to processes because of terrorism and subversion.

Hernando Hernández, secretary of international issues of the union workers USO; **Robinsón Beltrán Herrera**, president of Sintraelecol-Cartagena, **Teresa Mallet**,

ing elements of the individual freedom and contribute to the generalization of an anti union culture that continuous pointing out the union organizations as collateral organizations to the subversion and as an obstacle for the economic progress of the companies.

It doesn't seem unapropiate then to affirm that from the international human rights's point of view, the 12 breakings against headquarters or union leaders' homes, the 42 detentions of unionized workers and the 55 cases of harassment between January and December of the year 2003, constitute infringing acts of the individual freedom and the rights to union freedom. Furthermore, they evidence the paradox that political and social organizations face when processes of peace are glimpsed or definitive strategies of war settle down against some of the armed actors in the country.

This anti union culture that is as old as the same history of the syndicalism in Colombia, finds a favorable space for its development and can be reinforced with the expedition and approval of the antiterrorist statute in

December 2003. The group of articles included in the statute can possibly be useful to face the armed conflict. However, the reformations that it supposes, introduce a series of measures leading to limit the individual freedoms. This group of limitations that ignore and also oversee the budgets of the international system of human rights and the recommendations of United Nations for Colombia, have become an instrument to limit the full exercise of the rights of union freedom and public, political and legal action of the union organizations. The case of the unionized workers in the department of Arauca, is a good example of it.

These facts, added to the deterioration of the labor and union rights of the Colombians, and to the closing of the agreement spaces, make explicit the anti union attitude of Uribe's government and, basically, the blindness of a government that doesn't seem to understand the implications of the security paradox in terms of the construction of a non armed scenario of resolution of the social and political conflicts suffered by the country.

leader of Sintrahospiclinicas-Bucaramanga; **Rafael Palencia Fernández**, president of the union of workers of the working Ministry-Cartagena, and **Policarpo Camacho**, leader of the Agricultural Union of the Municipality of Calarcá, department of Quindío. The following workers among others, were subject to housebreaking: **Samuel Reyes**, of the Colombian Federation of Educators –Fecode–; **Germán Robison**, Directive of Union of Teachers of Nariño; **Rafael Palencia Fernández**, union directive of the Union of Workers of the Ministry of the Work in Cartagena.

4. Causes of the violence against the Colombian unionized workers in the 2003.

**Violations because of the facts unionized workers.
January 1-December 21. 2003.**

Causes	2003	%
Armed conflict	29	4.70
Union activity	559	90.60
Social violence	6	0.97
Non identified	23	3.73
Total	617	100%

Source: ENS



Source: ENS

The state of war that Colombia experiences and the articulation between the armed conflict and the industrial disputes doesn't mean to affirm that a lineal and causal relationship exists between the war and the

violation of the human rights of the workers in Colombia. On the contrary, for the Union National School, it is clear that 90% of the violations to the human rights of the unionist, in the 2003, are related with their union ac-

tivities. The omnipresence of the war and the fact that the violations be made directly in most of the cases by its actors, shows the problem of the methods, but not that of the premeditation. The war is simply an instrument used by diverse domestic sectors –a method–, whose purpose is to weaken, neutralize and put an end to the organizations of workers. For that reason, it is not strange that most of the violations to the human rights of the Colombian workers takes place in moments in which industrial disputes are solved or over, that is to say, during the negotiation of collective conventions and during the realization of national and local strikes.

This situation is not the result of an indiscriminate, irrational, not calculated and causal violence. On the contrary, it is selective, discriminated and calculated because it goes against the high union leaders and the intermediate leaders of organizations that have big interlocutory decree levels and public and political pressure. It is the case, for example, of those branch federations that play a main role in the definition of public policies (Fecode), of those labor organizations that possess a great interlocutory capacity and mobilization (the Unitary Center of Workers –CUT–), and of those national unions that operate in strategic

sectors of the national economy (Sinaltrainal, USO and Sintraelecol, to mention some).

To accept that in contexts of war like ours there is a smaller possibility of guarantee of the human rights and that, even, the “normal and expected” is that in this contexts the events, the logic and the grammar of the war moves to the scenario of the social and labor conflicts, should not take us to oversee that the armed groups –in permanent negotiation with non armed groups– have gone to the displacement, the kidnapping, the threats and the murder of workers as a deliberate strategy to put an end to the union organizations or to push negotiations. This penetration of the war on the labor world can be verified with those cases in which mayors and managers have hired to their service armed groups to force the members give up the unions, to the collective conventions and their job.

Some examples that allow illustrating one more time that the violence against the unionists happens in most of the cases amid industrial disputes are:

- The “volunteer” giving up to the rights already gained by Collective Convention on behalf of the workers of the La Ceja Hospital, East Antioqueño, affiliated to the Na-

tional Association of Workers of Hospitals and Clinics –Anthoc– after being menaced by paramilitary organizations⁵.

- The threats to the Directive Board Sinaltrainal when it was negotiating the chart of petitions with the company Femsa Coca-cola in May 2003 and, the forced resignation, because of threats, of the arbitrate chosen to represent this union organization in the industrial dispute with the Transnational Nestlé-Cicolac in Valledupar, in February 2003.⁶
- The murder of Juan de Jesus Gómez, president of the sub-directive of Sintrainagro, when his union organization had just made an agreement with the company Palmas del Cesar and was getting ready to begin the strike in that company.
- The recurrent threats to leaders, Directive boards and family Meetings of the members of the Worker's Union –USO– in Bucaramanga, Barrancabermeja and Bogotá and;
- The threats in October 21 2003 by

the Urban Cell, Cacique Calarcá of the United Self-defenses of Colombia against **José Vicente Villada, Antonio J. Ramírez Arias, Bernardo Bernal Álvarez, Gloria Inés Ramírez Ríos, Diego María Osorio, Jhon Jairo Loaiza, Ubenny Morales, Javier Duque Murillo, William Gaviria Ocampo y Gustavo Ramírez**; union leaders affiliated to the CUT, the Teachers Union from Risaralda –SER–, Motorist Union –UNIMOTOR– and the informal economy Sector.⁷

These cases are just an arbitrary example of a situation that questions, with the forcefulness of the facts, the thesis saying that the omnipresence of the war is the cause of all the nation mistakes. With this statement it is only sought to affirm that the solution to the humanitarian crisis of the Colombian syndicalism cannot be mediated by the non-criticism acceptance of the government and managerial argument, according to which, the Colombian government is not directly responsible for the acts of violation of the workers' human rights, for the dynamics of

-
5. You can actually see the reassignment act, signed by the workers and representatives of the company where it is exposed as reason the necessity to diminish operative expenses. February 14th 2003.
 6. See the text issued by Sinaltrainal, May 2003.
 7. See the annex, complete issued by Urban Cell (Celula Urbana), Bloque Cacique Calarcá.

the armed conflict has made it lose its control capacity and regulation of the social life. Possibly, a much more attached thesis to the facts would point out that in a context of deep weakness of the State and social anarchy, the war has been, in fact, an instrument used by sectors of the State and employer sectors to regulate, conflicts, without solving them, that are located in the labor world.

5. The violence against women, as a strategy of immobilization

The increase in 600% of the violations to the human rights of the unionized women in Colombia constitutes, with no doubt, one of the most concerning and dramatic facts of the general situation experienced by the workers and the Colombian union movement in the 2003.

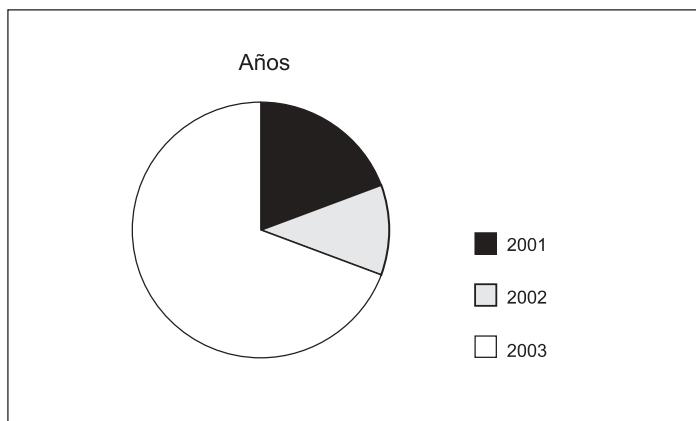
**Total of violations against unionized women.
Colombia. January-December, 2001, 2002 and 2003.**

Type of violation	2001	2002	2003
Threats	14	6	104
Attacks	5	-	1
Displacement	6	1	42
Detention	-	-	8
Homicides	25	20	27
Kidnapping	2	3	2
Harassments	1		8
Missing	-	1	-
Housebreaking	-	-	2
Total	53	31	194

Source: ENS.

Traditionally, the anti union violence against the women has been understood as a collateral effect of the war, except for the actions against

women of the high union leadership. The victims of this violence have been observed as victims of an indiscriminate armed conflict or accidental vic-



Source: ENS.

tims of the violence exercised and directed against the union movement. In this sense, the figures of violations against women, in most of the cases, have been underrated and appear as meaningless compared to those addressed against the masculine union leaders. However, beyond the registered figures, it is necessary to review the violations against women in the symbology and phenomenology of the facts and in the intentions and languages of their killers.

What is appreciated in the increase of the violence against the women is the displacement of the violations toward the family nucleus of the union worker also committing the integrity of people not belonging to the union movement.

With the substantial increment of the violations against unionized women, it is possible to underrate the

thesis of collateral victims, for these cases are introduced in the logic of a discriminating violence whose objectives are beyond the simple intention of silencing the victim. They reflect in their intentions a symbolic and strategic purpose of immobility and terror.

A woman murdered in their children's presence, a mutilated woman, a woman whose children's life is threatened or who is used as a pressure, becomes the symbolic means through which the message is an example to the others. Therefore, these violations are not an end in itself, they are not meant for punishment or vengeance, on the contrary, they are the image of terror addressed to others: children, family, neighbors and the other unionized workers, and they intent to push the choice between life and integrity or the union activity.

The violence against women has also a strong cultural connotation. In their social role as mothers, this social assignment makes them responsible not only for their life but for all their family nucleus, in a way that their children's integrity and well-being are their responsibility, what would imply that any action against them is a direct effect against their own ones. In this logic the murderers have developed singular ways to push or to charge those who consider the opponent and, in the case of the unionized women, their actions are accompanied with terror where the victim becomes the public character necessary to generate a collective panic as a way of control and immobilization.

The teacher's Shooting of María Rebeca López, by an unknown armed group in the municipality of Uramita,

department of Antioquia;⁸ the murder of Morelly Guillén, a health employee, affiliated to Anthoc in the municipality of Fuzz, department of Arauca⁹; the detention, torture and decapitation of the Teacher Liliana Caicedo Pérez by the National Army in Ricaurte, department of Nariño¹⁰; the kidnapping and later murder of the teacher Ana Cecilia Duke Villegas¹¹, by National Liberation Army –ELN– and Lina Mamian¹², murdered, the 10th august in Timbío-Cauca after having pointed at a member of paramilitary army. All these examples show that the impossible becomes possible in Colombia, a way of regulation, domination and immobilization.

It is important to point out that María Rebeca was shot in front of her three year-old son, Morelly Guillén was murdered inside his house,

8. María Rebeca, affiliated to Adida, was murdered on May 29th 2003. See: *Revista Noche y Niebla* N° 27, Bogotá, January-June, 2003. p. 244.
9. Morelly Guillén was murdered on june 16th 2003. See: *Revista Noche y Niebla* N° 27, Bogotá, January-June, 2003. p. 271.
10. Liliana Caicedo, affiliated to Teachers' Union of Nariño –Simana–, had asked the National Army not to use the educational institution as a camping zone because of the risk involved for the students. She was taken out of her house and then murdered on june 21th 2003. See: *Revista Noche y Niebla* N° 27, Bogotá, January-June, 2003, p. 277.
11. Ana Cecilia Duque was kidnapped and then murdered on April 26th 2003. For further information see issue to the public opinion by ENS May 2sn 2003.
12. Lina Mamian was shut and murdered on August 10th 2003 outside her house (ten shutings). According to the community, the paramilitary had been captured and then released once his commander nicknamed Ruben would pay a million pesos for his freedom. See: *Noche y Niebla*. p. 90. August 10th 2003, Timbío-Cauca.

Liliana Caicedo's body was decapitated and with signs of torture, and the kidnapping and later murder of Ana Cecilia Duke was the result of a retaliation against her father.

Let us stand out that the aforementioned murders previously possess a similar modus operandi on behalf of their murderers. All these women belong to the education sector and they developed significant activities for the

community, what made them important and grateful leaders. In most of the cases the teachers were murdered before different witness, children, neighbors and relatives. All were subjects to public degradations and taken as symbolic examples of the horror of violence. Through such murders, beyond their deaths, the murderers made sure that the message was overwhelming, rude and direct.

6. Violations by departments

Most dangerous departments for the union activity. Total of violations. January 1-December 31. 2003

Departament	Nº Homicides	Nº Threats
Antioquia	12	37
Atlántico	8	
Arauca	10	135
Valle	8	23
Cesar	5	1
Magdalena	6	-
Bolívar	2	4
Santander	3	29
Norte de Santander	6	1
Tolima	8	1
Risaralda	1	20
Cundinamarca	2	3
Bogotá D.F.	-	34
Caldas	3	-

Source: Data Base of Human Rights, ENS

**Total of violations to life, freedom and integrity of
colombian union workers. Departament of Antioquia.
January 1-December 31. 2003**

Type of violation	Nº Cases
Homicides	12
Tretas of death	37
Forced displacement	4
Attacks	1
Kidnapping	2
Detentions	1
Total	57

Source: Data Base, ENS

The two previous tables show three different situations. In the first place, they point out a decrease of the violence against the workers in the department of Antioquia, the most dangerous place in Colombia to exercise the union activity in the year 2001. In second place, they evidence the appearance of new territories disputed by the armed actors and the geographical expansion of the spaces in which the human rights of the workers are violated. Finally, they show the increase of the state violations in areas that were consider as special areas of public order (as an example the department of Arauca).

The consolidation of the paramilitarism in several antioquenian municipalities, the attenuation that the union organizations suffered in the

period 1997-2001 and the extermination of many leaders and organizations are some examples of the significant decrease of the violence in this department. However, it is necessary to point out that Antioquia continues to the head of the Colombian departments with the highest number of murdered unionized workers. On the other hand, the increase of the murders and threats in the department of the Valle is deeply tied to the territorial disputes that the Farc, the paramilitary groups and the ELN liberate in that region. To this situation of the Valle department, we have to add the disputes among the drug dealers and the crossing of this war with internal combats of the paramilitary groups.

The situation of the union workers in general and the increase and

worsening of the violence against Sintraemcali in the 2003, cannot be seen but in the intensification of the war and the presence of multiple actors of the armed conflict in this department. It should be clear, however that the recurrent threats against these workers and the murders in March 2003 of **Jorge Vásquez, Wilmer Vergara and Nelson López** is the consequence of the strong action that the workers have carried out against the privatization of the Public Utilities of Cali since the year 2000.

7. Violations against federations and centrals

In the 2003, the most affected union sectors were the Colombian teachers, especially from primary and secondary of the municipal sector and contained in the Colombian Federation of Educators, the workers of Health in the Association of Workers of Hospitals and Clinical and the sub directives of the CUT in several Colombian regions.

The case of the Colombian teaching sector that continues being the most serious case in the country, is related with three aspects. In the first place, this sector possesses high levels of political pressure, of social protest and of interlocutory decree and, therefore, it has been a strategic sec-

tor in the protests against the neoliberal policies and reduction of the social expense applied in Colombia in the last decade. In the second place, this sector counts on the most important and biggest organization of the country. And in the third place, the workers and the school headquarters are located in areas disputed by the actors of the armed conflict.

The other important case is that of the Unitary Central of Workers CUT that also reports 99% of the threats, 59% of the detainees, and 83% of the kidnappings and 100% of forced missing. Accepting that a sub registration can exist regarding the other two Colombian Centrals, we have to point out that the violence against the CUT evidences the selective, discriminating and calculated character of the union violence once again in Colombia.

From this general violence against the affiliated workers to the CUT it is important to stand out that in 30% of the cases the threats of death against the directives reached their relatives and some of them suffered from attacks, kidnappings and missing of the leaders' children. This situation can be illustrated with the following cases:

- The threats, in the month of May 2003, against **Magda Beatriz and Ana Paulina** daughters of **Domingo Tovar Arrieta**, Director of the department of Human

- rights of the National CUT.
- The threats, in February 2003, against **Gladis Barajas**'s family, president of the Union of the Circle of Graphic Reporters.¹³
 - The threat of the Central block of the United Self-defenses of Colombia, in May 2003, against the union leaders of the USO and their relatives.
 - The threats against the son of

María Clara Baquero National President of Asodefesa and,

- The missing of **Marlon Mina Gambi**, a leader's son of the Worker Union and the kidnapping and torture of **David José Carranza** son of **Limberto Carranza** union leader of Sinaltrainal (September 10, 2003).

The following tables illustrate us in statistical terms this situation:

**Total of violations by Central Union.
January 1-December 31. Colombia. 2003**

Central	Nº casos
CUT	599
CGTD	2
Non Confederate	16
Total	617

Source: ENS

**Total of violations by services sector.
January 1-December 31.2003**

Sub sector	Nº cases	%
Education	363	83.8
Health	15	3.46
Municipal workers	20	4.61
Others	35	8.08
Total	433	100

Source: ENS

13. This threat was made by paramilitary groups in an official statement that headlined "death to unionized workers and defenders of freedom of the press..."

Total of violations by economic sector.
January 1-December 31. 2003

Sector	Nº cases	%
Services	433	70.1
Mines and Quarries	86	13.9
Industrial Manufactures	23	3.72
Electricity	31	5.02
Commerce	12	1.94
Agriculture	25	4.05
Construction	1	0.16
Transport	4	0.64
Financial	2	0.32
Total	617	100

Source: ENS

8. Presumed responsible

The situation that has been presented so far has been, in a reiterated way, object of recommendations, observations, debates and pronouncements by the different regulatory agencies of the ILO, by the different instances of the system of the Organization of American States and by international union organizations. The permanent concern on behalf of these organisms continues contrasting with the few signs of improvement that are presented in terms of the figures on violations to the human rights of the unionized workers during the year 2003 and with the more and more frequent legal and material restrictions

existing in Colombia for the full exercise of the rights of union freedom.

There is a concern to the recurrent condemnation of the murders and other acts of violence against the Colombian unionized workers because most of the violations, that is to say, more than 95% remain in the impunity and many of the homicides are not investigated because there is no responsible of the fact or because the syndicated one is an illegal armed group.

To this impunity, almost absolute, there is the fact that the Colombian government doesn't act immediately so that the investigations cover the entirety of the violent facts. It still insists on pointing out that the union

violence is a consequence of the state of war that the country lives and not a selective and discriminated violence against the workers, and their organizations.

Just as it was pointed out before, there were 617 violations to life, freedom and integrity in the 2003; 422 cases, 68% of the total, the author is unknown or it has not been denounced. Same situation happens regarding the 90 homicides of unionized workers: in 74 cases, that is to say in

the 82% of the total, either it is not known or information is not given regarding the author or responsible for the fact. In the remaining cases the paramilitary organizations are responsible for 87 cases of threats of death and 14 cases of unionized workers' homicides, the guerilla organizations are responsible for 2 homicides, 7 threats of death and 2 kidnappings and the organisms of the public force are responsible for the entirety of the detentions, retentions and housebreakings.

**Presumed responsible total of violations to life,
freedom and integrity colombian unionized workers.
January 1-December 31. 2003**

Type of violación	Paramil.	Guerrilla	Sindato	OSE*	Total
Homicides	14	2	74	-	90
Threats	87	7	201		295
Attacks	2	-	9	9	20
Kidnapping	3	2	1		6
Harassment	1	-	44	10	55
Forced Missing	2	-	4	-	6
Arbitrary detention	-	-	-	42	42
Forced displacement	2	-	89	-	91
Housebreaking	-	-	-	12	12
Total	111	11	422	73	617
%	17,99	1,78	68,3	11,66	100

* OSE: Security Organisms of State. Source: ENS

9. Proposals and conclusions

As we did the previous year, we want to insist on the necessity of overwhelming actions on the part of the Colombian State, the movement of human rights and the international syndicalism to protect life and integrity of human and labor rights of the unionized workers. In this sense we propose and insist on the necessity of:

- Establishing a permanent mission in the observation country, monitoring and accompaniment of the Colombian syndicalism on the part of the confederations and international secretariats, taking the form of an international union protectorate on Colombia.

- Enlarging the Command of the Program of Technical Cooperation of the ILO for Colombia in order to do monitoring, and following up to the fulfilling of recommendations over ILO' Organs of Control.
- Settling the Survey Commission for Colombia.
- Establishing a mixed, national and international, commission of experts that knows in detail the state of the judicial processes against the authors of violations to the human rights of the unionized workers, recommend actions for its clarification, and monitor the state of the investigations for those crimes.

Events in the year 2003

On January 11th professor **Jamil Mosquera Cuesta** was murdered in the city of Medellín, department of Antioquia who had received threats of death; he belonged to the Teachers Association of Antioquia –Adida–.

On January 15th the Human Rights Department of the General Office of the Nation in Bogotá, department of Cundinamarca, decreed assuring measure against **Hernando Hernández**, opening the file number 1127-B, accusing him of having links with the insurgent groups, the union leader acted as Secretary of International Matters of the Worker's Union –USO– and former president of the Unitary Central of Workers

–CUT–; he has been distinguished as a defender of the interests of the nation, especially the Petroleum Colombian Company –Ecopetrol– and its workers.

On January 11th in the municipality of Tame, department of Arauca **José Marcelino Díaz González** was murdered. He was affiliated to the Association of Educators of the Arauca, –Asedar–; educator well known as a leader in the union, community and school.

On January 18th **Policarpo Camacho** and his partner **Gloria Holguín** were subject to a housebreaking. They were both leaders of the Agricultural Union of the municipality of Calarca, department of Quindío, and both were stopped and

shown in the media as owners of a clinic of the Farc.

On January 21st **Abelardo Barbosa Páez** was murdered in the municipality of Port Wilches, department of Santander; he was affiliated to the National Union of Workers of the Agricultural Industry, –Sintrainagro–.

On January 24th **Luis Hernando Caicedo** was murdered in the municipality of Yumbo, department of the Valley of the Cauca; he was member of the Union of Motorists and Workers of the Transport Industry –Unimotor–.

On February 2nd **Robinson Beltrán Herrera** was retained by members of the secret police in the city of Manizales, department of Caldas; he was, president of the Union of Workers of the Corporation Corelca –Sinraelecol –Corelca–.

On February 3th **Luis Eduardo Guzmán Álvarez** was murdered. He was the secretary of education of the municipality of Bello, department of Antioquia, affiliated to the Teachers Association of Antioquia –Adida– during several years he led this organization. He was also director of several schools, president, secretary and member of Education for Bello and member of the council of the municipality of Bello.

On February 8th **Humberto Campos Martínez** was murdered by paramilitary people in the municipality María La Baja, department of Bolívar. He was a teacher

and affiliated to the Unique Union of Educators in Bolívar, –Sudeb–.

On February 9th the president of the National Association of Handmade Fishermen, **Luis Antonio Romo Rada** was murdered in the municipality of Ciénaga, department of Magdalena.

On February 13th the teacher **Luz Mery Valencia** was murdered in the municipality of Puerto Asís, department of Putumayo, belonging to the Association of Educators of Putumayo.

On February 14th **Ana Delia Soto López** was murdered in the municipality of Ocaña, department of North of Santander, affiliated to the Workers Union of Health, –Anthoc–.

On February 17th the president of the union of the Colombian Circle of Graphic Reporters, **Gladys Barajas** was threatened in the city of Bogotá, department of Cundinamarca, by means of a letter in which all her family nucleus is threatened.

On February 19th **Maritza Ortega Serrano** was murdered in the city of Valledupar, department of the Cesar; she was affiliated to the Association Of Educators Of the Cesar, –Aducesar–.

On February 20th **Juan Antonio Bohórquez Medina** was kidnapped, and three days later found dead, in the municipality of Bituima, department of Cundinamarca. He belonged to the Teachers Association of Cundinamarca. –Adec–

On February 21first **Fredy Perilla Montoya** was murdered in the city of Cali, department of Valle del Cauca. He acted as activist of the Workers Union of the Municipal Utilities of Cali, –Sintraemcali–.

On February 24th **Bertha Awazacko Reyes** was murdered in the city of Tunja, department of Boyacá; she was affiliated to the Teachers Union of Boyacá, –Sindimaestros–.

On February 25th **Rufino Maestre Gutiérrez** was murdered in the municipality of Bello Horizonte , department of Cesar, belonging to the Teachers Association of the Cesar, –Aducesar–.

On February 26th, the United Self-defenses of Colombia-AUC, carries out threats against the members of the Union of University Workers of Colombia – Sinraunicol–. In the threats immediate military objective are **José Múnera Ortega** (President of the National Directive Board), **Antonio Flórez** (inter union secretary and member of the commission of Human Rights of the National Board) **Luis Otávaro Amazara** (general secretary of the National Board of Directors), **Elizabeth Montoya** and **Norberto Moreno** (president and activist of the sub directive Medellín, respectively), **Bessi Pertuz** (vice-president and responsible for the Commission of Human Rights of the National Directive Board), **Luis Ernesto Rodríguez** (president of the sub directive Bogotá), **Álvaro Vélez**

(president of the sub directive Montería), **Mario José López Puerto** (treasurer of the national board of directors), **Álvaro Enrique Villamizar Mogollón** (president of the sub directive Ibagué), **Ana Milena Cobos** (Secretary of Human Rights of the sub directive of Fusagasuga), **Carlos González** and **Ariel Díaz** (fiscal and secretary of Human Rights of the sub directiva Cali, respectively). There plows also threats against **José Aristides Arango**, **José Eurípides Delgado**, **Rosmery Estupiñán**, **Mauricio Rivera**, **Luis Alejandro Díaz**, **Julián Lozano**, **Mauricio Pinto** and **Príncipe Gabriel González**. On November 26th 2003 threats continued to be reported.

On February 27th **Jairo Echávez Quintero** was murdered in the municipality of Chimila, department of the Cesar; he was affiliated to the Teachers Association of Cesar, –Aducesar–.

On March 1first **Samuel Morales**, president of the sub directive CUT–Arauca was detained. He was left in freedom thanks to the immediate accusation and the pressure of the different defenders NGO of human rights.

March 5th **Roberto Borja Rubiano**, union directive, was threatened of death in the city of Barranquilla department of the Atlántico, belonging to the National Federation of Unions of Public Workers, –Fenansintrap–.

On March 5th **Teresa Báez Rodríguez**

was subject to a housebreaking. She is president of Sintraclínicas-Bucaramanga, branch of the CUT, permanent partner of Miguel Sierra, national directive of the Unique Union of Workers in the Industry of Construction Materials –Sutimac-. She was stopped and accused of rebellion by the district attorney. In the year 2002, she had been subject to kidnapping intent and reiterated threats of death. On February 20th 2003, a fellow tried to attack her at the entrance of the clinic where she works in Bucaramanga. It was also denounced that in more than an opportunity, the director of the clinic of Bucaramanga, has tried to take her union jurisdiction away.

On March 13th **Wilson Castro, Edwin Molina and Dean Santos** in were threatened the city of Cartagena, department of Bolívar. They are members of the National Workers Union of Food Industry –Sinaltrainal-. They received a call in the secretary of the union, sectional Cartagena, and were told that the three had been declared military objective that their time in the union organization had finished and that the headquarters would be blown away with whoever was inside.

On March 8th **Luis Alfonso Grisales** was murdered by paramilitary in the municipality of Arauca, department of Arauca. He was member of the Teachers Association of Arauca, –Asedar-.

On March 12th **Soraya Patricia Díaz** was murdered in the municipality of

Quinchía, department of Risaralda. The teacher belonged to the Teachers Union of Risaralda, –SER-.

On March 20th **Alejandro Torres** was murdered in the municipality of Arauquita, department of Arauca, affiliated to the Workers Union of the Health, –Anthoc-.

On March 28th **José Rubiel Betancur Ospina** was murdered in the municipality of Norcasia, department of Caldas, the teacher was affiliated to the Union of United Teachers of Caldas, –Educal-.

On April 7th **Cecilia Salas** was murdered in the city of Buenaventura, department of Valle del Cauca, , affiliated to the Workers Union of the Department –Sintradepartamento-.

On April 7th **Evelio Salcedo Taticuán** was murdered in the city of Pasto, department of Nariño He was affiliated to the Working Teachers Union of Nariño, –Simana-.

On April 8th **Luz Estella Calderón** was murdered in the municipality of Samaná, department of Caldas. She was affiliated to the Union of United Teachers of Caldas. –EDUCAL-.

On April 21first **Ana Cecilia Duque** was kidnapped and five days later murdered by people identified as members of the Army of National Liberation ELN in the municipality of Cocorná, department of Antioquia. She belonged to the Teachers Association of Antioquia, –Adida-

On April 24th **Luz Estella Zapata Cifuentes** was murdered in the municipality of Nueva Anserma, department of Caldas. She belonged to the Union of United Teachers in Caldas, –Educal–.

On May 1st **Juan Gómez** was murdered in the municipality of San Martín department of the Cesar, president of the National Workers Union of the Agricultural Industry, –Sintrainagro–. This union was in bargaining had voted the strike on April 28.

On May 5th **José María Ruiz Sara** was murdered in the municipality of Palermo, department of the Magdalena. He was affiliated to the Teachers Union of the Magdalena, –Edumag–.

On May 6th **Juan Manuel Monsalve Niño** was murdered in the municipality of Tame, department of Arauca, together with his wife. They had two children of 2 and 4 years old. The professor Monsalve belonged to the Teachers Association of Arauca, –Asedar–.

On May 7th **Ómar Alexis Peña Cardenas** was murdered in the city of Cúcuta, department of North of Santander. He belonged to the Teachers Association of Northern Santander, –Asinort–.

On May 7th **Ramiro Manuel Sandoval Mercado** was murdered in the municipality of Chima, department of Córdoba. He was affiliated to the Teachers Association of Córdoba, –Ademacor–.

On May 8th **Nelson López, Wilmer**

Vergara y Jorge Vásquez was murdered with a high-power explosive load in the Drinking Water Treatment Plant of Emcali, Puerto Mallarino. They belonged to the Workers Union of Municipal Utilities of Cali, –Sintraemcali–.

On May 8th **Jorge Eliécer Moreno Cardona** was murdered in the municipality of Supia, department of Caldas, after having been attacked. The teacher was affiliated to the United Educators Union of Caldas, –Educal–.

On May 11th **Héctor Jaime Victoria Sterling** was murdered in the municipality of Garzón, department of the Huila, affiliated to the Educators Union of Huila, –Adih–.

On May 15th **Ángel Alonso Parrao Parrao** was murdered in the municipality of Paratebueno, department of Cundinamarca. He belonged to the Workers Union of National Electricity, –Sinraelecol–, according to the residents' versions he was checking the electric counters of the paramilitary's houses of the region.

On May 24th **Luis Oñate Henríquez** was murdered in the department of Atlántico, belonging to the Workers Union of National Electricity, –Sinraelecol–.

On May 31st **María Rebeca López Garcés** was murdered in the municipality of Uramita, department of Antioquia; affiliated to the Teachers Association of Antioquia, –Adida–. The teacher was a 3 year-old boy's mother.

On June 3rd **Nubia Cantor Jaimes** was murdered in the municipality of Arauca, department of Arauca, she was affiliated to the Workers National Union of Health, –Anthoc–.

On June 8th **Jorge Eliécer Suárez Sierra** was murdered in the city of Cúcuta, department of North of Santander, member of the Teachers Union Association of Northern Santander, – Asinort–.

On June 16th **Morelly Guillén** was murdered in the municipality of Tame, department of the Arauca, she was affiliated to the Workers National Union of Health, –Anthoc–.

On June 17 **Orlando Fernández** was murdered in the city of Valledupar, department of the Cesar, belonging to Sintraemsdes.

On June 17th **Luis Humberto Rolón** was murdered in the city of Cúcuta, department of Northern Santander, member of the Saling Union of Lottery.

On June 19th **Liliana Caicedo Pérez** was brutally murdered in the public square. She was the directress of the Mixed Rural School "Ospina Pérez" of the municipality of Ricaurte, department of Nariño. She was a very well known social leader who had moved to corregimiento Junín to claim the freedom of the parish priest of Altaquer who had been kidnapped by paramilitary people. She belonged to the Workers Union of Teachers of Nariño,

–Simana–.

On June 20th **Fanny Toro Rincón** was murdered in the city of Ibagué, department of the Tolima, affiliated to the Workers National Union of Health, –Anthoc–.

On July first **María Orozco** was murdered in the municipality of new Anserma, department of the Valle. The teacher and leader of the region , together with her husband, was member of the Unique Union of Workers of the Education of the Valle, –Sutev–.

On July 3rd **Rafael Ángel Mesa Aguilar** was murdered in the municipality of Segovia, department of Antioquia, member of the Union of Official Workers of the Municipalities of Antioquia, – Sintraofan–. He worked as a treasurer of sub directive in Segovia.

On July 4th **Pedro Germán Flórez** was murdered in the municipality of Saravena, department of Arauca, belonging to the Teachers Association of Arauca, –Asedar–.

On July 15th **Marco Tulio Díaz** was murdered in Cartagena city, department of Bolívar, belonging to the Worker Union, –USO–.

On July 15th **Alberto Márquez** was murdered in the municipality of Santa Bárbara, department of Antioquia. The activist belonged to the Unique Workers Union of Construction, –Sutimac–.

On July 19th was murdered **María del Socorro Núñez** in the municipality of

Tulúa, department of Valle, affiliated to the Unique Workers Union of Valle Education, –Sutev–.

On July 23d **Carlos Barrero Jiménez** was murdered by paramilitary people, in the city of Barranquilla, department of the Atlántico, He acted as a he-nurse of the General Hospital of Barranquilla, member of the Workers National Union of Health, –Anthoc–. The presumed author of the homicide is the so called paramilitary group Masin, (Death to union leaders).

On July 24th **Juan Carlos Ramírez Rey** was murdered in the city of Villavicencio, department of the Meta., He was member of the Union Association of Employees of the Penitentiary and Prison Institute, –Aseinpec–.

On July 24th **Yolima Herrera García** was murdered in the city of Medellín, department of Antioquia; member of the Teachers Association of Antioquia, –Adida–.

On August 1 first the Teachers Association of Arauca, –Asedar– presented a report on the teachers' situation in the department, denouncing 87 threatened and displaced teachers who are under the Special Committee of Threatened Teachers; they are relocated outside the department of Arauca and 36 are displaced internally.

On August 15th there were threats against **Mauricio Álvarez, Víctor Jaimes, Juvencio Serpa** and **Elkin Menco**, in the

municipality of Barrancabermeja, department of Santander, belonging to the Worker Union, –USO–. These 4 members received a note saying that it is decision of the armed group M.D.U. (Death to leaders of the Union) to eliminate the four people mention above who will be executed by the organization.

On August 9th **Marleny Stella Toledo** was murdered in the municipality of Ocaña in the department of Northern Santander, she was affiliated to the Workers National Union of Health, –Anthoc–.

On August 10th **Victoria Jaimes** was murdered in the municipality of Ocaña, department of Northern Santander. She was nursing assistant, press and ad secretary, member of the board of directors of the Workers National Union of Health, –Anthoc–. Who was missing the previous day by paramilitary.

On August 10th **Lina Mamian** was murdered in the road between Popayán and Timbío, She was affiliated to the Teachers Association of Cauca, –Asoinca–.

On August 15th **Dennis Herrera de Villa** was murdered, in the city of Barranquilla, department of Atlántico, affiliated to the teachers Association of the Atlántico, –Adea–.

On August 16th **Luz Marina Vanegas** was murdered in the city of Medellín, department of Antioquia, belonging to the Teachers Association of Antioquia, –Adida–.

On August 17 **Miguel Rojas Quiñónez** was murdered by paramilitary, in the city of Barrancabermeja, department of Santander He belonged to the Teachers Union of Santander, –SES–.

On August 19th **Flor María Vargas** was murdered in the municipality of Alejandría, department of Antioquia. She was affiliated to the Teachers Association of Antioquia, –Adida–.

On August 21first **Fredy Buenaventura Cruz** was murdered in the municipality of San Sebastián, department of Cauca. He was a member of the Teachers Association of Cauca, –Asoinca–.

On September 3third **José Rafael Fonseca Cassiani, Ramón Fonseca Cassiani y César Augusto Fonseca Morales**, bodies were found in pieces by a chain saw in the municipality of Ponedera-Atlántico. They were siblings and belonged to the Workers Union of Agricultural From the Atlántico.

On September **Iván Manuel Muñiz Bermúdez** was murdered in the city of Riohacha, department of Guajira, , affiliated to the Teachers Asociation of La Guajira.

On September 10th **Limberto Carranza** was threatened in the city of Barranquilla, department of the Atlántico, member of the Workers National Union of Food Industry, –Sinaltrainal–. His 15 yearold son was tortured, and asked his father's whereabouts. That same day they

called home to threaten him with verbal abuse.

On September 15th **Germán Charry Cabrera** was murdered by paramilitary people in the municipality of Algeciras, department of Huila, member of the Teachers Association of Huila, –Adih–.

On September 15th **Margot Londoño Medina** was murdered in San Antonio de Prado town, municipality of Medellín, department of Antioquia, member of the Teachers Association of Antioquia, –Adida–.

On September 17th **Renzo Vargas** was murdered in the municipality of Villarrica, department of the Tolima , member of the Colombian Federation of Educators, –Fecode–.

On September 19th **Dora Melba Rodríguez Urrego** was murdered in the city of Ibagué, department of Tolima, He was affiliated to the Teachers Union of the Tolima, –Simatol–.

On September 20th **Wilson Peluffo** was murdered in the city of Barranquilla, department of Atlántico, member of the Workers Union of Coolechera.

On September 25th **Nelly Herazo Rivera** and her husband **Abel Ortega Medina** were murdered in the municipality of Morroa, in the department of Sucre, both affiliated to the Teachers Union of Sucre, –Ades–.

On September 26th **Rito Hernández Porras** was murdered in the municipality

of Saravena, department of Arauca, belonging to the Workers Union of the Municipal Utilities, –Sintraecass–.

On October 3d **Luis Carlos Olarte Gaviria**, president of the Union of the Frontino Gold Mines, was murdered in the municipality of Segovia, department of Antioquia. This fact is added to the attack to the previous vice-president of the union of the mining company in August.

On October 4th **José Ángel Mejía Ríos** was murdered in the municipality of La Union, department of Antioquia, member of the Teachers Association of Antioquia, –ADIDA–.

On October 22nd the members of the Unitary Central Union –CUT–, was threatened in the city of Pereira, department of Risaralda. These threats, persecutions and reiterative harassments, come from a group called Masin (Death to Union Workers), and the AUC (United Self-defenses of Colombia) and give the victims 10 days to abandon the region. The threats have been addressed directly against the leaders of the sub directive of the CUT-Risaralda, of the Union of Educators of Risaralda, Unimotor and to the Union of Informal Economy Sector (street sellers) and specifically to **Bernardo Bernal Álvarez** and **Antonio José Ramírez**. In this last leaflet of October 22nd there are ten threatened to death of the union leaders, defenders of the human rights and members of political organi-

zations being forced to live indoor.

On November 3d **Everto Fiholl Pacheco** was murdered in the municipality of Pueblo Viejo, department of Magdalena, belonging to the Union of Educators of Magdalena, –Edumag–.

On November 5th **Nubia Estela Castro** was murdered in the municipality of Tenerife, department of the Magdalena, belonging to the Union of Educators of Magdalena, –Edumag–.

On November 9th **Orlando Frías Parada** was murdered in the municipality of Villanueva, department of the Casanare, belonging to the Workers Union of Communications, –USTC–.

On November 11th **Ricardo Espejo, Marco Antonio Rodríguez, Germán Bernal y José Céspedes** were murdered in the municipality of Cajamarca, department of the Tolima, belonging to the Union of Agricultural Workers of the Tolima, –Sintragricol–.

On November 11th **Zuly Esther Codina Pérez** was murdered in Santa Marta city, department of Magdalena, the journalist belonged to the Workers Union of Magdalena Health, –Sindes–.

On November 11th **Jorge Peña Moreno** was murdered in the Magdalena's department, affiliated to the Union of Educators of Magdalena, –Edumag–.

On November 16th **Mario Sierra Anaya** was murdered in the municipality of Saravena, department of Arauca, who

was official employee of the old Incora and member of the Directive Meeting of the Union of Workers of that institution, – Sintradin– belonging to the Unitary Central Union of workers Sectional CUT Arauca.

On November 17th **Miguel Ángel Anaya Torres** was murdered in the municipality of Saravena, department of Arauca, affiliated to the Union of Workers of Utilities to the Service of the State, – Sintraemsdes–.

On November 30th **Carlos de la Rosa Elles** was murdered in the city of Barranquilla, department of Atlántico, affiliated to the Workers Union of the Company of At-

lántico –Sintraatlantico–.

On December 3^d **José de Jesús Rojas Castañeda** was murdered, in front of his wife, in the city of Barrancabermeja, department of Santander, who belonged to the Union Association of Municipal Educators –Asem–.

On December 14th **Severo Bastos** was murdered in the municipality of Villa del Rosario, department of Northern Santander, member of the Workers Union of Colombian Institute for the Agrarian Reform. A few days ago he was worker of the Incora in Saravena (Arauca) and acted as substitute district attorney of the board of directors of Sintradin, sectional Arauca.